



UNIVERSIDAD NACIONAL
“PEDRO RUIZ GALLO”
ESCUELA DE POSGRADO



MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

**“El procedimiento de acusación constitucional a altas
autoridades en el Congreso de la República”**

TESIS

**Presentada para optar el Grado Académico de Maestro
en Derecho con mención en Constitucional y Gobernabilidad**

AUTOR:

Abog. Vallejos Farías, William

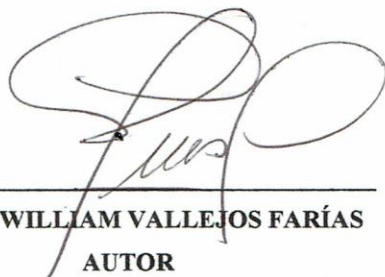
ASESOR:

M. Sc. Bermúdez Tapia, Manuel

LAMBAYEQUE - PERÚ

2020

**“EL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A ALTAS
AUTORIDADES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA”**



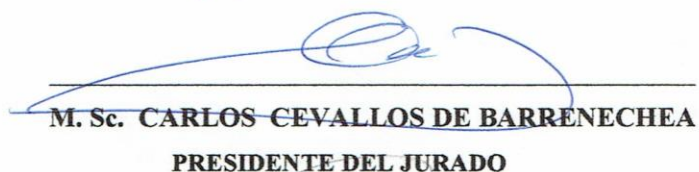
Abog. WILLIAM VALLEJOS FARÍAS
AUTOR



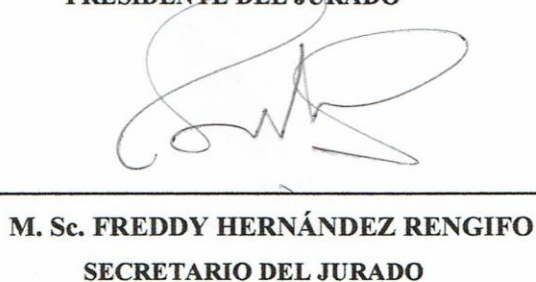
M. Sc. MANUEL A. BERMUDEZ TAPIA
ASESOR DE TESIS

**PRESENTADA, PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER EN
DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y
GOBERNABILIDAD.**


APROBADA POR:



M. Sc. CARLOS CEVALLOS DE BARRENECHEA
PRESIDENTE DEL JURADO



M. Sc. FREDDY HERNÁNDEZ RENGIFO
SECRETARIO DEL JURADO



M. Sc. MARIANO LARREA CHUCAS
VOCAL DEL JURADO

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

043

Siendo las 5:00 PM, horas del día VIERNES 14 de DICIEMBRE del año Dos Mil Dieciocho, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 0022-2016-EPG de fecha 25 DE ENERO DE 2016, conformado por:

M.SC. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA PRESIDENTE (A)

M.SC. FREDY HERNANDEZ RENGIFO SECRETARIO (A)

M.SC. MARINO CARREA CHUCAS VOCAL

M.SC. MANUEL BERTUDEZ TAPIA ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada

EL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A ALTAS AUTORIDADES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

presentado por el (la) tesista WILLIAM VALLEJOS FARIAS

sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 2433-2018-EPG de fecha 05 DE DICIEMBRE DE 2018

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 80 puntos que equivale al calificativo de BUENO

En consecuencia el (la) sustentante queda apto, (a) para obtener el Grado Académico de MAESTRO EN DERECHO CON MENCIÓN EN CONSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD

Siendo las 6:00 PM, horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

PRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

ASESOR

Declaración Jurada De Originalidad

Yo, WILLIAM VALLEJOS FARÍAS, investigador principal, y MANUEL BERMÚDEZ TAPIA, asesor del trabajo de investigación **“EL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A ALTAS AUTORIDADES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA”**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni contiene datos falsos. En caso se demostrara lo contrario, asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar. Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 6 de noviembre de 2020

Nombre del investigador William Vallejos Farías.

Nombre del asesor Manuel Bermúdez Tapia.

DEDICATORIA

Con amor y gratitud eterno a Dios, mis padres, Lady
por la paciencia, mis hijos mi presente y futuro.

AGRADECIMIENTOS

A Dios, mis padres, mis hijos y Lady

INDICE

Dedicatoria	05
Agradecimiento	06
Índice	07-08
Resumen	09-10
Abstract	11-12
Introducción	13
Primera Parte	14
Análisis del objeto de estudio	
1. Ubicación	14-15
2. Planteamiento del problema	16-22
3. El contexto temático respecto de la evolución del Proyecto de Tesis, la Observación al Proyecto de Tesis y la Redacción de Tesis	22-29
4. Formulación de la pregunta problematizadora	30
5. Justificación e importancia de estudio	31
6. Objetivos	32-33
Segunda Parte	34
Desarrollo de la investigación y del marco teórico de la tesis	
1. Antecedentes en la ejecución de la investigación	34
2. Marco teórico utilizado en la investigación	35-36
Capítulo I	37
Análisis del contexto político nacional	
1. El contexto preliminar que guía la investigación	38-43
2. La debilidad institucional en la política nacional	43-46
3. La débil relación entre gobernabilidad y democracia	46-48
4. Los diferentes contextos de evaluación (determinación del universo y muestra de estudio)	48-51
Capítulo II	52-53
Análisis del proceso constitucional-penal y el procedimiento parlamentario	
1. La determinación del tema constitucional y penal en el estudio de la	54-56

tesis	
2. Análisis del contexto constitucional y político de la Constitución de 1993	56-59
3. Los derechos fundamentales guía en la ejecución de la investigación parlamentaria	60-62
4. La división de instancias y trámites parlamentarios	62-66
Capítulo III	67
Casos particulares en análisis	
1. La delimitación del universo y muestra de estudio	68-69
2. De los casos referenciales y del detalle de la importancia de analizar casos judicializados con sentencia final	70-72
Capítulo IV	73
El diseño de un procedimiento de investigación y juzgamiento en el fuero parlamentario, a modo de desarrollo de la hipótesis de la tesis	
1. Planteamiento de una posición académica sobre un “procedimiento parlamentario” en el ámbito del Derecho Parlamentario	74-78
2. Planteando el procedimiento parlamentario de acusación constitucional, conforme los artículos 99 y 100 de la Constitución	78-82
Tercera Parte	
1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados	83-91
2. Presentación del modelo teórico	91-93
Cuarta Parte	94
Aspectos metodológicos de la investigación	
1. Diseño de contrastación de la hipótesis	94
2. Población y muestra	95
3. Análisis de las variables e indicadores utilizados en la investigación	96-97
4. Localidad e institución donde se desarrolló la investigación	98
5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos	98
6. Descripción detalla de la metodología empleada	99
7. Aspectos administrativos	100-102
Conclusiones	103-105
Recomendaciones	106-107
Bibliografía	108-114

RESUMEN

En el análisis de la realidad constitucional peruana, podemos observar una serie de situaciones que podrían permitir el estudio de diferentes áreas disciplinarias.

La realidad peruana así presenta un panorama sumamente amplio y complicado de evaluar, principalmente porque la “realidad social” no siempre se relaciona con la “legislación” y ello nos permite desarrollar para este punto específico, una serie de respuestas que generan otra particularidad en el modo de su evaluación.

Así es posible responder la anterior cuestión con la presentación de que en casos de contradicción entre la norma y la realidad surge la *evolución del derecho*, que se expone en casos judiciales. Otra respuesta podría ser, que los quiebres sociales no pueden ser admitidos y frente a ello surge el *derecho penal*, como mecanismo coercitivo del Estado para poder volver a regular una situación social que se ha descontrolado.

En este ámbito, surgen muchas respuestas que eventualmente pueden tener validez y puedan responder a la pregunta inicial: ¿Qué sucede en caso de vacío normativo?

La respuesta podría pensarse que está focalizada sólo al ámbito penal o eventualmente al ámbito administrativo, que son en esencia las “áreas jurídicas” con mucha mayor actividad en la realidad nacional.

Un error que usualmente se frecuente y que en la presente tesis se pretende explicar, toda vez que es la *legislación* la que es “incompleta”, principalmente cuando tiene que juzgar *situaciones especiales*, generalmente provocadas por sus “Altas Autoridades”, quienes en el ámbito laboral-funcional-político y constitucional ocupan las principales plazas del Estado, como: El Presidente de la República, los Congresistas de la República, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la República, los Fiscales Supremos, los miembros de los Órganos Constitucionales Autónomos, conforme se detalla de la complementación de los artículos 99° y 100° de la Constitución.

Surge por ello una cuestión: ¿Cómo entonces se ejecuta una “Acusación Constitucional” cuando alguno de estos funcionarios, que ocupan una “Alto” puesto en el Estado son sometidos al imperio de la Ley?

La cuestión que genera una mayor complicación al ámbito de estudio, está vinculado al *derecho parlamentario* que es una *sub especialización* del *derecho constitucional* y nos permite detallar que existen situaciones en las cuales la *legislación* no ha sido desarrollada y no logramos ubicar una fuente objetiva y directa que nos explique la razón de dicho contexto.

Eventualmente en la ejecución de la presente investigación, hemos evaluado una serie de *fuentes de información* que nos han permitido determinar la razón de nuestro inicial punto de investigación: ¿Por qué no existe un procedimiento parlamentario para determinar las responsabilidades constitucionales y políticas de un funcionario considerado en un Alto Cargo en el Estado?

La razón parte del análisis del artículo 93º de la Constitución y es que el *mandato imperativo* es ajeno a la *labor parlamentaria* y bajo esta condición, los Congresistas de la República optan por *evaluar temporalmente cada caso* que provoca la interpretación de los *procedimientos parlamentarios de acusación constitucional*.

Ante este contexto es que nuestra motivación por generar un procedimiento específico, en aras de cumplir con el *principio de legalidad*, en la máxima instancia política y constitucional del país, nos permite sostener los alcances de la presente tesis.

ABSTRACT

In the analysis of the Peruvian constitutional reality, we can observe a series of situations that could allow the study of different disciplinary areas.

The Peruvian reality thus presents an extremely broad and complicated panorama to evaluate, mainly because the "social reality" is not always related to the "legislation" and this allows us to develop for this specific point, a series of responses that generate another particularity in the way of your evaluation.

Thus, it is possible to answer the previous question with the presentation that in cases of contradiction between the norm and reality, the evolution of the law arises, which is exposed in judicial cases. Another answer could be that social breakdowns can not be admitted and in front of it arises the criminal law, as a coercive mechanism of the State to be able to return to regulate a social situation that has become out of control.

In this area, many answers arise that may eventually be valid and can answer the initial question: What happens in the event of a regulatory vacuum?

The answer could be thought to be focused only on the criminal sphere or eventually on the administrative sphere, which are essentially the "legal areas" with much greater activity in the national reality.

An error that is usually attended and that in the present thesis is intended to explain, since it is the legislation that is "incomplete", mainly when it has to judge special situations, generally caused by its "High Authorities", who in the field labor-functional-political and constitutional occupy the main squares of the State, such as: The President of the Republic, the Congressmen of the Republic, the members of the Supreme Court of Justice of the Republic, the Supreme Prosecutors, the members of the Constitutional Bodies Self-employed, as detailed in the complementation of articles 99 and 100 of the Constitution.

A question therefore arises: How then is a "Constitutional Accusation" executed when one of these officials, who occupy a "High" position in the State, is submitted to the rule of Law?

The issue that generates a greater complication to the scope of study, is linked to the parliamentary law that is a sub specialization of constitutional law and allows us to detail that there are situations in which the legislation has not been developed and we can not locate an objective and direct source to explain the reason for this context.

Eventually in the execution of the present investigation, we have evaluated a series of sources of information that have allowed us to determine the reason for our initial research point: Why there is no parliamentary procedure to determine the constitutional and political responsibilities of an official considered in a High Position in the State?

The reason part of the analysis of Article 93 of the Constitution and is that the imperative mandate is foreign to parliamentary work and under this condition, the Congress of the Republic choose to temporarily evaluate each case that causes the interpretation of the constitutional accusation proceedings .

Given this context, our motivation to generate a specific procedure, in order to comply with the principle of legality, in the highest political and constitutional instance of the country, allows us to sustain the scope of this thesis.

INTRODUCCIÓN

En la ejecución de nuestro trabajo de investigación, debemos sostener el siguiente esquema de trabajo.

Se ha ejecutado una investigación de naturaleza empírica y básica, sobre la base de la cual se ha estructurado un esquema de trabajo que procura *validar* nuestro proyecto de tesis, inicialmente aprobado por la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En este sentido, en la presente investigación, se procura enfatizar tres ámbitos específicos:

- a) El desarrollo de un “Marco Teórico”, sobre la cual desarrollaremos nuestra investigación, sobre la cual estructuramos la ejecución de “capítulos”, que se dividen en dos puntos específicos, en base a su “naturaleza y objetivos”.
 - i. La presentación, análisis y desarrollo del *contexto problemático*, sobre la base del análisis de los “antecedentes” de nuestra investigación.
 - ii. La presentación y evaluación problemática de los principalmente elementos teóricos y conceptuales que determinan la “naturaleza” del *problema de la tesis*.
- b) El desarrollo de la *hipótesis de trabajo*, sobre la cual planteamos nuestra posición y también nuestro aporte, tomando en cuenta que consideramos que el “problema de la investigación”, parte por la determinación de registrar un *vacío normativo*, en los procedimientos parlamentarios.
- c) La validación de la relación “problema-hipótesis”, el cual se desarrolla en la III Parte de la presente tesis y procura explicar los métodos sobre los cuales se ha ejecutado nuestra evaluación, sobre la base del análisis de la bibliografía y de las referencias determinadas en entrevistas y encuestas ejecutadas.

Con la presentación metodológica de la Tesis, iniciamos el desarrollo de nuestra investigación de Tesis.

PRIMERA PARTE

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1. UBICACIÓN.

La presente investigación se determina en forma interdisciplinaria¹, sobre la base de la complementación de:

Área	Elemento referencial	Elemento teórico a ser evaluado
Derecho Constitucional	Estructura de la Administración Pública	Determinación de privilegios y prerrogativas en los funcionarios públicos
	La dirección política del Estado	Identificación de las altas autoridades en el Estado
Teoría de Estado	División de las funciones del Estado	Facultades de cada órgano estatal
	Contrapesos político constitucional	La facultad fiscalizadora y jurisdiccional del Congreso de la República
Derecho Penal	Delito y presunción de inocencia	Principios de orden punitivo en el control social
	La acusación penal (hecho ilícito y legislación penal)	El iter criminis penal
Derecho Procesal	Los procesos especiales	Proceso jurisdiccional y de fiscalización en sede política: Congreso de la

¹ Instituto de Estudios Peruanos (2017) *El Perú en teoría*. Lima, IEP, p. 23

		República
	Medios probatorios	Evaluación de la prueba
Derecho Procesal Penal	La acusación constitucional	El seguimiento del proceso de acusación constitucional por comisión de falta/delito/infracción constitucional por alta autoridad por parte del Congreso de la República
	El proceso penal en el ámbito constitucional contra Altas Autoridades	El trámite en casos especiales

En este punto, resulta necesario señalar que la ejecución de la investigación, nos ha permitido identificar diferentes elementos teóricos que en forma secuencial explican el *contexto problemático*, sobre la cual identificamos nuestro *problema de investigación*.

Situación que inclusive es un *patrón histórico* como lo señala Francisco Morales Saravia, cuando detalla que esta referencia está visualizada en el Perú del siglo XIX².

Sobre este punto, debemos señalar que en términos iniciales, explicaremos las razones que nos permiten detallar el *esquema de presentación del problema a tratar*, sobre la base de que su referencia es *coloquial* muy a pesar de que el contexto es absolutamente *coyuntural y referencial* toda vez que en la actualidad en la cual se presenta la Tesis, se esta debatiendo el análisis de los “CNM-Audios”, los cuales han remecido el panorama político nacional.

² Morales Saravia, Francisco (1997) Forma jurídica del Estado en el constitucionalismo peruano del siglo XIX, p. 329 en: *Pensamiento Constitucional*. Vol. 4, N° 4, 1997.

Esta referencia nos permite detallar que a pesar de lo que se pueda considerar, *existen pocos elementos bibliográficos* sobre el análisis del tema a tratar y esto porque la suma especialización de las áreas tratadas ha condicionado a los especialistas a ser muy breves en una referencia que se basa en lo *político* antes que en lo procesal y en lo constitucional.

Por ello es que en el Congreso de la República, muy a pesar de las condiciones teóricas referenciales sobre la temática, no existe una *posición uniforme* sobre el particular.

Una situación que inclusive es graficada en algunos puntos referenciales en la “parte de ejecución de la investigación” para validar nuestra afirmación.

Ante este panorama, es que presentamos la referencia contextual a ser detallada a continuación.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En la actualidad, en el Congreso de la República se ha observado una serie de situaciones vinculadas al ámbito penal, procesal penal, constitucional y procesal constitucional vinculados al **procedimiento de acusación constitucional y desarrollo de un antejuicio político**.

Ambas instituciones finalmente conducen a una “Acusación Constitucional”, la cual determina una eventual imposición de sanción (cuya naturaleza jurídica es múltiple: penal, administrativa, constitucional y política), y puede devenir en una serie de situaciones, como:

- a) La llamada de atención.
- b) La suspensión en el cargo.
- c) La destitución en el ejercicio del cargo³.
- d) La inhabilitación en el ejercicio de algún cargo político o público⁴.

³ Delgado, Luis Humberto (1956) *Yo acuso 1956: ante el Congreso de la República*. Lima, Ariel, p. 42

Criterios tan disímiles como “autónomos”, más aún tomando en consideración que no existe “uniformidad” en el tratamiento a ser ejecutado ni muchos menos una “predictibilidad” en cuanto a la determinación de las sanciones.

Basta con observar la siguiente referencia que se presenta en los días previos a la presentación del Texto de la Tesis:

Personaje	Referencia	Proyección de una situación futura
Benicio Ríos	Sentencia penal por comisión de delito en una etapa previa a su incorporación al Congreso	Desafuero No existe referencia alguna sobre una eventual inhabilitación o suspensión de derechos de naturaleza constitucional o parlamentaria
Yesenia Ponce	Adulteración de hoja de vida en la postulación a cargo público (delito contra la fe pública)	Suspensión en el cargo
César Hinostroza	Juez involucrado en los CNM Audios	Retiro de Inmunidad
Guido Águila / Iván Nogueira	Miembros del CNM involucrados en una red de tráfico de influencia	No se ha señalado ninguna “eventual” sanción, suspensión de derechos o inhabilitación en instancia parlamentaria

⁴ Yshi Meza, Luis (1991) La pena de inhabilitación en los delitos contra la administración pública. P. 401. En: Libro Homenaje al profesor Hurtado Pozo. Lima, IDEMSA.

Como se podrá observar de estas referencias puntuales y que han sucedido entre los meses de junio a agosto del 2018, no existe una *posición uniforme* en el ámbito de la evaluación de casos de acusación constitucional contra Altas Autoridades⁵.

Ante este panorama referencial, es que se hace necesario tener presente los siguientes elementos que guiarán la ejecución de la tesis:

- a) A pesar de la referencia a un hecho de naturaleza “penal” o eventualmente posible de ser identificado como “de naturaleza penal”, no haremos la evaluación del *delito o de la falta* que tenga dicha connotación penal, por cuanto, dicho ámbito de estudio corresponde a un análisis penal, ajeno a las líneas objetivas que pretende de la presente tesis.
- b) A pesar de las circunstancias referenciales, se debe tener presente que las *conclusiones o situación final* de todo lo que se evaluará aún no *finaliza*. Ante esta situación, nuestra línea de investigación procura evaluar “procedimientos”, con lo cual superamos toda situación “coyuntural, excepcional o particular”, razón por la cual desde el inicio de la investigación planteamos nuestra posición.
- c) Pese a existir un contexto sumamente referencial para el análisis de un *tema específico en una Tesis*, debemos señalar que pocos autores nacionales hacen referencia puntual a “casos puntuales – procedimiento parlamentario – situación o posición tomada por el Congreso de la República”, ello principalmente porque, se ha observado:
 - i. Los autores que conocen de Derecho Parlamentario, son muy pocos en el país.
 - ii. Los autores que analizan el ámbito procesal, el ámbito procesal penal y el contexto penal con una referencia al contexto constitucional, son muy pocos⁶.

⁵ Landa Arroyo, César (2005) Antejjuicio Político, p. 125. En: *Elecciones*, Año 4, N° 5, octubre 2005.

⁶ Eguiguren, Francisco (2008) Antejjuicio y juicio en el Perú, p. 112, En: *Pensamiento Constitucional*, Año 13, N° 13, 2008

- iii. Los autores que analizan la “evaluación política” de los casos referenciales, omiten hacer referencia a los elementos teóricos de naturaleza constitucional, penal y procesal, que son aplicables al tema, con lo cual su *referencia teórica* en la presente tesis, es sólo a nivel de “análisis de antecedentes”⁷, por cuanto no permiten evaluar una posición teórica⁸.
- iv. Los autores especialistas en derecho constitucional sólo hacen un análisis limitado a la interpretación de los alcances de los artículos 99 y 100 de la Constitución.
- v. Los especialistas en *derecho parlamentario*, sostienen que es el propio Congreso de la República, en base al comportamiento político-constitucional de sus congresistas, que no formulan un *procedimiento parlamentario específico* para formular el desarrollo de *Acusaciones Constitucionales* porque ello podría provocar un “límite” en las competencias funcionales de los parlamentarios.

Ante esta situación, es que señalamos que este factor contextual debe ser tomado en cuenta en la evaluación de la presente Tesis, en particular porque este punto fue materia de observación por el profesor Freddy Hernández Rengifo, quien señalaba la necesidad de atender algunos aspectos metodológicos expuestos en el proyecto de tesis.

Históricamente dicha institución ha permitido que autoridades públicas puedan ser juzgadas en un ámbito constitucional y parlamentario conforme a un procedimiento reglado con lo cual una responsabilidad político legal pueda ser evaluada y con ello se garantizaría la funcionalidad de los **controles de poderes**.

Sin embargo, esta realidad teórica se ha venido cuestionando en los últimos años principalmente porque los Congresistas de la República y los últimos tres Presidentes

⁷ Sar Suarez, Omar (2005) El antejuicio, el juicio político y la vacancia presidencial analizados a partir de la sentencia de inconstitucionalidad del inciso j del artículo 89 del Reglamento del Congreso. P. 296, en: Ius Et Veritas, Año 15, N° 31, 2005.

⁸ Delgado Guembes, César (2007) *Prerrogativas parlamentarias: aplicación y límites en un caso de antejuicio político*. Lima, Grijley, p. 191

de la República han presentado panoramas de evaluación político en donde se ha presumido una participación o acción delictiva y se ha sometido a evaluación.

Así podemos explicar por ejemplo:

- a) en el caso de Alejandro Toledo, se le había cuestionado su capacidad moral respecto de su negativa de admitir la paternidad de su hija menor de edad (en ese entonces)

El procedimiento de acusación constitucional para solicitar su vacancia por incapacidad moral finalmente fue desestimado en votación en el Pleno del Congreso de la República.

- b) La misma situación se presentó con el señor Alan García quien a inicios de su segundo período se le descubrió una paternidad de un hijo extramatrimonial y ante ello la oposición política planteó la destitución del cargo de la Presidencia, justamente por los mismos alcances de la acusación contra Alejandro Toledo.

Sin embargo, el resultado en este caso fue la improcedencia del pedido en la misma Comisión de Acusaciones Constitucionales cuando el propio Alan García confiesa su paternidad ante su esposa ante los medios de prensa.

- c) Actualmente al Presidente Ollanta Humala se le vincula a situaciones de lavado de activos principalmente por parte de la Presidencia de su Partido Político, quien es su señora esposa.

Ante esta situación no se ha evaluado correctamente cual es el procedimiento formal a seguirse y por ello es que se debate entre:

- i. La instalación de una Comisión de Investigación en la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Usualmente se denomina “Grupo de Trabajo” y es compuesto por tres personas.

La fuente de esta afirmación proviene del *análisis de las prácticas parlamentarias* y de la propia expresión de motivos por parte de los

propios congresistas, no ubicándose ninguna norma en específico sobre el particular.

- ii. La instalación de una Comisión de Investigación de carácter extraordinario, con facultades especiales otorgado por el Pleno de la República.

Una vez “finalizado” el trabajo de esta Comisión, el “Dictamen” se comunica al Pleno del Congreso, quien deriva a la Comisión de Constitución su posterior trámite para que esta lo derive a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

- iii. La apertura de una investigación formal en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Usualmente formulado por un *congresista* que integra dicha Sub Comisión, principalmente por contar con una imagen pública fiscalizadora y por ello el “trámite” es prácticamente eficaz, frente a los otros procedimientos, detallados anteriormente.

- iv. La apertura de una investigación formal en la Comisión de Fiscalización.

El “Dictamen” en dicha Comisión puede ser derivado a su debate o al Pleno del Congreso de la República o a la Comisión de Constitución.

Como se podrá observar, existen varias posiciones y no hay una decisión formal y final sobre un aspecto particular: ¿Cómo se desarrolla el trámite de una acusación constitucional?⁹

Este panorama finalmente es el que nos permite plantear una investigación de orden constitucional, penal y procesal, en el cual nuestro objetivo final es proponer un esquema de trabajo que incluya procesos de investigación, de acumulación de medios probatorios, juzgamiento en el fuero parlamentario y el seguimiento de

⁹ Cairo Roldán, Omar (2014) El juicio político en la Constitución Peruana, p. 121. En: *Pensamiento Constitucional*, Vol. 18, Nº 18, 2013.

principios de orden procesal constitucional hasta la culminación de una decisión por parte del Pleno del Congreso de la República

Este problema finalmente como se puede presentar no es particularmente exclusivo para una “especialidad jurídica”, muy por el contrario exige la complementación de varias especialidades (Constitucional, Penal y Procesal) pero desde nuestra perspectiva y para efectos del presente proyecto de tesis, se comunica que la línea de trabajo principal está vinculada al Derecho Constitucional, debido a que vamos a ejecutar un procedimiento de naturaleza parlamentaria para así regular un procedimiento que hasta la actualidad no ha sido detallado ni en el Reglamento del Congreso de la República ni tampoco en una norma especial o particular.

Ante lo expuesto y sobre la base del análisis de nuestra propia realidad, es que consideramos que el tema central a ser investigado se reduce a la inexistencia de un procedimiento formal, reglado y que responda a principios de orden penal y constitucional.

En este sentido, nuestro problema de investigación es la evaluación del **procedimiento de la formulación de la Acusación Constitucional en el Congreso de la República dirigido a Altas Autoridades.**

Como consecuencia de este problema, nuestra pregunta problematizadora, la exponemos a continuación:

3. EL CONTEXTO TEMÁTICO RESPECTO DE LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE TESIS, LA OBSERVACIÓN DEL PROYECTO DE TESIS Y LA REDACCIÓN DE LA TESIS.

Por ello, a modo de poder señalar el contexto inicial de nuestro tema de estudio en la ejecución ya de la Tesis, sostenemos algunos puntos referenciales “guía” que han sido delimitados por nuestra inicial proyección de investigación que se mantienen en la presente tesis:

A. SOBRE LA RELACIÓN ENTRE EL “PROBLEMA” Y LOS “OBJETIVOS GENERALES”.

Debemos señalar que en la actualidad no existe un **procedimiento de la formulación de la Acusación Constitucional en el Congreso de la República dirigido a Altas Autoridades**, con lo cual nuestra base en la investigación está determinada en forma objetiva.

Sobre los objetivos que planteamos, señalamos:

- a) Cuando señalamos que en los objetivos generales, analizaremos el objetivo de la “corrupción” entre personajes que ocupan altos cargos en el Estado, por ello la mención expresa a Jefaturas de Órganos Constitucionales Autónomos (por ejemplo, a raíz de los CNM-audios), hacemos expresa mención de que las principales Acusaciones Constitucionales formuladas durante el período 2001 a la fecha se han debido a casos de corrupción manifiesta.

Salvo el caso de Alberto Fujimori, en la cual se procedió a la Acusación Constitucional por incapacidad moral, no existe otro antecedente en que se haya juzgado política y constitucionalmente a un funcionario público y por ello nuestro énfasis a este punto.

Queda señalar además que a Alberto Fujimori se le juzgó políticamente como “incapaz moral” por las excesivas muestras de corrupción que se habían detectado y por ello no se procedió a acusar en forma individual por cada acto denunciado sino en forma general.

Por tanto, si nuestro objetivo general es justificar un procedimiento de acusaciones constitucionales a altas autoridades, es porque estos personajes ejecutan actos de corrupción. Los casos de Michael Urtecho, José Anaya, Elsa Canchaya, Tula Benites, son una muestra palpable de nuestra posición y sobre la misma existe al menos *documentación en el propio Congreso de la República*, no existiendo la misma información en el ámbito jurisdiccional, principalmente por el principio de reserva y privacidad del ámbito penal a favor del “imputado de un delito”.

Posición muy distinta por ejemplo al caso José Leoncio Torres Ccalla en la cual se procedió al desafuero ante la Acusación Constitucional por incapacidad moral por haber ejecutado actos contra la indemnidad sexual al querer violar a una menor de edad en las propias instalaciones del Congreso de la República (2004)

- b) En nuestro segundo objetivo, al evidenciar las falencias descritas en el primer objetivo, nuestra intención es proponer una mejora de la estructura y procedimiento parlamentario, porque a la fecha resulta cuestionable que la Comisión de Ética tenga mejores elementos de evaluación ciudadana que la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y aunque parezca paradójico, la Comisión de Ética por Reglamento del propio Congreso de la República es sólo una Comisión Extraordinaria, esto es no es ordinaria y por tanto sus Dictámenes son sólo referenciales para el debate en el Pleno del Congreso de la República.

En términos sencillos, lo que decida la Comisión de Ética no tiene vinculación formal con la decisión que tome el Pleno del Congreso de la República a diferencia de lo que pueda ejecutar la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Este punto, ha sido propuesto inicialmente en un “cuadro de referencia”, en la cual podemos observar que las “acciones finales” ejecutadas en el Congreso de la República, son de diferente naturaleza y situación.

- c) Sobre los objetivos específicos, señalamos que estos se encuentran en la posibilidad de “desarrollar” los objetivos generales y describen puntualmente lo que ejecutaremos en el esquema propuesto como Índice de la propia Investigación de Tesis en un esquema en el cual se pasa de un nivel descriptivo de la realidad a un análisis deductivo que sostiene nuestra propuesta.

B. RESPECTO DEL DESARROLLO DEL ACTUAL PROCEDIMIENTO QUE SE SIGUE EN EL CONGRESO SOBRE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES.

El profesor Hernández nos planteaba, la necesidad de analizar y desarrollar el actual procedimiento que se sigue en el Congreso sobre las Acusaciones Constitucionales.

Sobre el particular, consideramos importante y necesario dicha propuesta, pero también es importante señalar que sobre el tema existen estos elementos referenciales:

- a) Existe un trámite sólo a nivel administrativo parlamentario, en la cual un Congresista de la República formula una Acusación Constitucional¹⁰ y esta se plantea ante la Oficialía Mayor.

Presentado el Documento (así se denomina en el procedimiento parlamentario) se deriva a la Comisión de Constitución.

En la Comisión de Constitución se somete a debate el derivo o no de la Acusación Constitucional a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

En este sentido, mucho se puede cuestionar el “trabajo” final de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales sobre un *caso puntual*, pero la bibliografía no ha logrado identificar la razón por la cual dicha Sub-Comisión no puede trabajar y es porque existe un filtro que limita dicha acción y esta situación no es detallada por la bibliografía nacional.

Este punto, es importante de detallar y por ello es que la asesoría temática de la presente tesis está a cargo del profesor Manuel Bermúdez Tapia, quien ha sido *jefe del Gabinete de Asesores y Bancadas Parlamentarias en el Congreso de la República*, siendo además autor de varios trabajos sobre el particular.

Conforme este punto “crítico”, es de resaltar que los alcances de la presente tesis, procuran *mejorar* el actual contexto procedimental parlamentario.

- b) En la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, sobre la base de una denuncia contenida en un Documento (con una denuncia contenida), se elabora un **reglamento** el cual es particular, especial, temporal al año de funciones de dicho grupo de trabajo y es casuístico.

Esto es, no existen registros de un procedimiento regular o normado para todos los casos y allí viene nuestra observación para la formulación de nuestro problema de investigación.

La mejor referencia de este punto es la evaluación de diferentes casos que han sido de conocimiento público:

¹⁰ En este punto, sólo nos limitaremos a la función parlamentaria, por cuanto existe la posibilidad de que una Acusación Constitucional sea formulada por otros ciudadanos, funcionarios públicos o el propio Ministerio Público.

b.1. La acusación constitucional contra Eloy Espinosa-Saldaña Barrera por *adulteración de hoja de vida* en la postulación a Magistrado del Tribunal Constitucional¹¹.

b.2. La acusación constitucional contra magistrados del Tribunal Constitucional por el trámite de una sentencia con calidad de cosa juzgada, vinculada al Caso El Frontón: Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Carlos Ramos Núñez y Marianella Ledesma¹².

Esta situación, puede parecer desproporcional en un contexto de tanta importancia como es una Acusación Constitucional y se debe en principio al propio interés de los Congresistas de la República de no regular procedimientos estables en el tiempo, para así poder ponderar intereses políticos.

Esta referencia permite desarrollar estos casos:

- i. Imposibilidad de reglamentar el procedimiento de nombramiento de Altas Autoridades, por ejemplo en el caso del Tribunal Constitucional, los cinco años en los cuales no se nombró a ningún jurista, se debió a que los Reglamentos se cambiaban de año en año y sólo para modificar algunos aspectos sobre el “perfil” del candidato.
- ii. No existe en el Reglamento del Congreso una disposición que exija la materialización de procedimientos parlamentarios, porque existe de por medio la salvaguarda de la función parlamentaria de que estos funcionarios no están sujetos a mandato imperativo, conforme el Artículo 93 de la Constitución.

- c) En los últimos años, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República ha derivado en una situación de inestabilidad política al extremo que:

¹¹ GESTIÓN (2018) *El caso del magistrado del TC que mintió sobre ser “Doctor en Derecho”*. Recuperado el 18/07/2018, ubicado en: <https://gestion.pe/blog/menulegal/2018/04/el-caso-del-magistrado-del-tc-que-mintio-sobre-ser-doctor-en-derecho-loy-espino-saldana-detalle-por-detalle.html>

¹² LA República (2017) *TC informe plantea destituir a un magistrado y suspender a dos*. Recuperado el 20/12/2017, ubicado en: <https://larepublica.pe/politica/1157247-tc-informe-plantea-destituir-a-un-magistrado-y-suspender-a-dos>

c.1. No se ha instalado en el periodo 2015-2016 y sus integrantes no habían registrado sesiones. Un elemento que en su momento *fundamentó nuestra propuesta de investigación* y es por ello que se buscó asesoría especializada en la materia, porque esta referencia no se publicada en ningún sitio y sólo se llegó a dicho conocimiento en la búsqueda personal en la página web del Congreso de la República y no se observó ninguna actividad en esta Sub Comisión.

c.2. No se ha registrado Reglamento de sesiones durante los períodos 2013-2016. Referencia que proviene de la evaluación de la información del portal web del Congreso de la República, que paradójicamente se “elimina” cada cierto tiempo, esto es: “se suprime la información en detalle, de cada “link” que existe en el portal web del Congreso.

c.3. No se ha registrado designación de representantes parlamentarios por Bancada, durante los años detallados en este punto, debido a que estas se han ido modificando en función a los cambios de Bancada por los Congresistas.

Dicha información se desprende de la propia página de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales y es confirmada por nuestro Asesor Temático y Metodológico, el profesor Manuel Bermúdez Tapia, quien ha desempeñado el cargo de especialista parlamentario.

Por tanto, siendo elementos referenciales muy puntuales en el alcance de la presente tesis, resulta conveniente detallar estos elementos en forma preliminar, por cuanto somos conscientes que la observación del profesor Hernández Rengifo es válida e importante pero que en la realidad no es posible desarrollar por la propia acción desidiosa o negligente del propio Congreso de la República.

A. SOBRE LA DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA EN NUESTRA INVESTIGACIÓN.

Sobre la presente observación, efectivamente coincidimos con los planteamientos del profesor Hernández, principalmente porque la información estadística nos permitirá justificar nuestro principal objetivo específico: “*Proponer un procedimiento de*

Acusaciones Constitucionales que incluya la investigación preliminar, la formulación e inicio del procedimiento ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión de Constitución, que desarrolle cada etapa y se permita la determinación de una resolución que sea lo suficientemente vinculante para que se proceda con el seguimiento del proceso ordinario penal y se determine la responsabilidad penal, constitucional y política de una Alta Autoridad sometida a evaluación”.

Para ello ejecutaremos el acopio de información de todas las Acusaciones Constitucionales planteadas ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales durante los períodos del 2001 a la fecha, para así tener un “universo” totalmente delimitado, las cuales serán nuestro **“universo de estudio”**, y de los cuales analizaremos los elementos que sí han tenido referencia puntual en el ámbito judicial, los cuales serán **“la muestra de estudio”**.

Téngase en cuenta que en este sentido, existe un contexto constitucional y parlamentario poco conocido: las Acusaciones Constitucionales, no son dirigidas directamente a esta Sub Comisión y por ello, el desarrollo de esta sólo se desarrolla en forma especial, coyuntural y casuística.

La Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales forma parte de la Comisión de Constitución, la cual al ser Comisión Ordinaria, genera una “dualidad” de modos de desarrollo de los Dictámenes de las Comisiones. Si la Comisión de Constitución “no deriva” una Acusación Constitucional, la Sub Comisión no tiene las facultades para requerir dicha denuncia y así proceder a ejercer funciones.

El caso de Alejandro Yovera es una muestra palpable de nuestra posición y por eso el procedimiento de desafuero se ha desarrollado durante casi tres años.

A esta particularidad, se debe señalar que a la fecha, revisando la página web del Congreso de la República en el ámbito del trabajo de la Comisión de Constitución y de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales¹³, sólo se registra el “ingreso” de la Denuncia, más no el registro de la misma, la Comisión que evaluará dicha denuncia, el número de Congresistas que analizará la denuncia y emitirá el Pre Dictamen, debido a que durante los últimos tres años, la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales no ha formulado ni su Reglamento para la ejecución

¹³ CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2016) Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. Recuperado el 14/02/2016 de http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2012/sc_acusacionesConstitucionales/index.html

de sesiones ni tampoco ha diseñado un esquema de trabajo para afrontar cada Acusación recepcionada.

Esto **excluye** las actuales situaciones en trámite de los “personajes” involucrados en contextos de corrupción que nuestro país afronta en la actualidad. Por ello la importancia de la determinación de nuestra “muestra” de estudio a los casos de:

- a) Elsa Canchaya (2007)
- b) José Anaya (2008)
- c) Tula Benites (2008)
- d) Alejandro Yovera (2015)
- e) Michael Urtecho (2013)

Los registros de los desafueros, procedimientos finalizados con éxito en una Acusación Constitucional sobre parlamentarios son sólo los de ellos y no se ha registrado otros procedimientos de Acusaciones Constitucionales a:

- a) Miembros de la Corte Suprema, Fiscalía de la Nación, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo.

En este punto, los casos devenidos de los CNM-Audios son referenciales en cuanto al “contexto” pero no respecto del “resultado”.

- b) Miembros del Banco Central de Reserva, y otros Organismos Constitucionales Autónomos.

Se registra una acusación constitucional por la causal de “incremento de remuneración indebida”, pero a la fecha los “acusados” ya no desempeñan funciones, y el Congreso de la República aún no ha tomado una “posición” sobre el particular y el trámite parlamentario va dos años sin una referencia final.

- c) Funcionarios públicos del Poder Ejecutivo.

En el caso particular del ex Presidente, Ollanta Humala, se debe señalar que el proceso penal seguido no afectó su prerrogativa constitucional porque el delito fue previo a su mandato presidencial.

Por tanto, el “universo” en la recopilación de la información es sumamente limitado y por ello también la importancia de nuestra investigación, por cuanto sólo en la determinación de la “muestra” en un período determinado, por ejemplo en la última legislatura (2011-2016) nos podría permitir señalar que nuestros objetivos están absolutamente correlacionados.

Esto entra en vinculación con el “contexto actual” el cual sólo nos permitirá “enfaticar” el contexto problemático, pero no nos permite evaluar una “consecuencia” por cuanto el trámite en algunos casos aún no se inicia y en otros está en “trámite”.

Si no existe un “procedimiento de Acusaciones Constitucionales”, el cual implica un “vacío normativo” en el propio Reglamento del Congreso de la República (Norma con rango de Ley), consideramos que por un principio de legalidad, taxatividad y de respeto a principios de orden procesal y constitucional, debe regularse un *procedimiento parlamentario específico para desarrollar las Acusaciones Constitucionales*.

De este modo, se determinaría un sistema de predictibilidad objetiva, que supere el actual sistema de evaluaciones políticas, sujetas a la discrecionalidad de los acuerdos políticos.

4. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.

Tomando en cuenta el contexto preliminar y sobre la base de la realidad parlamentaria en nuestro país, específicamente en los últimos años, consideramos importante desarrollar el “Tema de estudio”, sobre la determinación de la “pregunta problematizadora” que permitirá detallar el “problema a tratar en la presente tesis”, sobre la base de la siguiente cuestión:

¿Es posible regular en una norma expresa el seguimiento de un proceso y procedimiento de acusación constitucional a ser desarrollado en el Congreso de la República para así poder determinar la responsabilidad político legal de un funcionario que tenga un rango de “Alta Autoridad” conforme lo determina la Constitución (artículos 99 y 100), respetando los fueros privativos del Poder Judicial, el debido proceso y el Estado de Derecho?

5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

Planteamos la investigación de nuestro tema de estudio en función a la evaluación de nuestra propia realidad, la cual es de por sí compleja, donde intervienen:

- a) Un sistema informal en el cual no existen partidos políticos coherentes que delimitan la institucionalidad de las entidades de la Administración Pública, principalmente a nivel de Poder de Estado y Organismos Constitucionales Autónomos.
- b) Un contexto próximo a la corrupción, en la cual ninguna entidad del Estado se encuentra exenta de este nivel de plaga que afecta la democracia en el país.
- c) Un contexto de impunidad generalizado, principalmente cuando se descubren situaciones en donde la presunción de inocencia se limita a la evaluación objetiva de hechos que nos permiten señalar que la comisión de un delito ha sido registrado.
- d) La determinación la “muestra de estudio” nos permitirá *proponer un esquema de trabajo*, específico que sobre la base de casos que han pasado del “fuero parlamentario” al “proceso penal constitucional” en la Corte Suprema, pueden determinar una proyección importante a los demás casos de *Altas Autoridades* en los procesos de acusación constitucional en el Congreso de la República y ello enfatiza nuestra objetividad en la ejecución de la presente propuesta.
Con este punto, planteamos plantear *una referencia* que supere el contexto “autonómico” de cada elemento procedimental evaluado: del parlamentario al fuero común.
- e) La evaluación general de los puntos anteriores, nos permite señalar que la democracia y gobernabilidad en nuestro país prácticamente se está limitando y ellos nos exige analizar y procurar alcanzar una solución, razón por la cual proponemos que el procedimiento de investigación, juzgamiento y

determinación de sanciones a autoridades que conforman las más altas investiduras del Estado sea regulado, para así evitar un trato diferenciado, incoherente o eventualmente inconstitucional.

Consideramos que nuestra realidad política, una democracia débil y una institucionalidad mellada nos permiten investigar mucho más el panorama parlamentario para así proponer en dicho fuero un procedimiento mucho más detallado y que responda a cualquier investigación, a cualquier personaje y sobre todo sea constitucionalmente válido para garantizar el debido proceso.

6. OBJETIVOS.

En la ejecución de nuestra investigación, proponemos los siguientes objetivos:

a) Objetivos generales.

- Estudiar el fenómeno de la corrupción entre personajes que ocupan altos cargos en el Estado: Poderes de Estado y jefaturas de Organismos Constitucionales Autónomos.
- Analizar el procedimiento parlamentario en general, para así poder estudiar cómo el Congreso de la República estructura sus propios procedimientos y así establecer mecanismos de reforma a nivel técnico y especializado.
- Evaluar la capacidad del Congreso de la República para analizar situaciones de orden penal y constitucional en función al trabajo que ejecutan sus Comisiones, para así mejorar su capacidad institucional y mejorar su legitimidad social, principalmente para diferenciar los conceptos de “procedimiento parlamentario constitucional de Acusación Constitucional” que involucra el juicio político, el mismo que no es elemento central en la presente tesis.

b) Objetivos específicos.

- Proponer un procedimiento de Acusaciones Constitucionales que incluya la investigación preliminar, la formulación e inicio del procedimiento ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión de Constitución, que desarrolle cada etapa y se permita la determinación de una

resolución que sea lo suficientemente vinculante para que se proceda con el seguimiento del proceso ordinario penal y se determine la responsabilidad penal, constitucional y política de una Alta Autoridad sometida a evaluación.

Mejorar la capacidad de intervención de personajes que ocupan altos cargos en el Estado para que así sus acciones no estén vinculadas a la criminalidad, tanto organizada como individual y así se mejore la institucionalidad democrática en el país.

- Regular un espacio académico que no suele ser evaluado en el ámbito académico y profesional: el fuero parlamentario, pero desde una perspectiva tanto constitucional, procesal como penal, para así poder plantear mecanismos de solución y proponer un trabajo inédito.
- Mejorar la institucionalidad democrática del país, para así lograr frenar la participación delictiva de muchos funcionarios y altas autoridades que bajo el manto protector de la Inmunidad Política (Presidente, Congresista y Presidente de un Organismo Constitucional Autónomo) no logra ser detenido, procesado y sentenciado cuando ha cometido un delito, sea en flagrancia o después de un proceso de investigación en el fuero ordinario.

SEGUNDA PARTE

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL MARCO TEÓRICO DE LA TESIS.

1. ANTECEDENTES EN LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

En este ámbito analizaremos nuestra propia realidad político social y la mayor parte de la información que utilizaremos en este nivel, será estructurada en base a la siguiente mención:

Elemento evaluado	Referencia de información
Respecto del “contexto preliminar” de estudio	Información periodística
Respecto del trámite de acusación constitucional en el Congreso de la República	Información periodística Evaluación de la información en la página web del Congreso de la República Bibliografía especializada
Respecto del proceso judicial seguido ante la Corte Suprema	Información periodística Bibliografía especializada

Esta información es sumamente importante de detallar, por cuanto podemos señalar:

- a) La información periodística, nos permitirá detallar el “contexto temático” que nos permite plantear la importancia y justificación de la presente investigación.

- b) La información del Portal Web del Congreso de la República, nos permite evaluar la propia acción constitucional y procedimental parlamentaria del Congreso de la República.
- c) La información bibliográfica, nos permitirá detallar aspectos teóricos de la investigación.

Sobre este punto, sin embargo, debemos señalar:

- c.1) Existen pocos trabajos vinculados al “tema”, al “problema” y al “marco teórico” de la presente propuesta de Tesis.
- c.2) Existe un marco referencial muy limitado en cuanto a tesis, monografías, artículos publicados en revistas jurídicas, sobre el tema propuesto.

Esta afirmación final la sostenemos sobre la base de la búsqueda de información en:

- a) Biblioteca Nacional del Perú, a través del registro de “títulos de obras” de publicaciones ejecutadas en el país, donde no hay una referencia directa al tema propuesto en la Tesis.

Corresponde señalar que esta información es pública y de acceso libre por el propio portal web de la Biblioteca Nacional.

- b) Biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

La misma que es pública y gratuita y se puede acceder directamente por su página web.

Esta herramienta nos ha permitido identificar algunas Tesis de referencia que al final han sido desarrolladas como *libros*, pero nos permite sostener la limitación de estos estudios.

2. MARCO TEÓRICO UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN.

Toda vez que la propuesta que presentamos es novedosa, en cuanto a la relación “tema teórico” con la “evaluación de casos puntuales de la realidad peruana”, definiremos el desarrollo de lo expuesto en el punto 1, de la primera parte de la

presente tesis (ubicación) en la exposición de la *investigación*, contenida en los siguientes capítulos.

Este orden metodológico nos permitirá detallar los dos aspectos finales de la tesis: el análisis de la “Discusión” y la “validación de la hipótesis”, con lo cual ***absolveremos la pregunta que*** que ha configurado nuestro tema de tesis.

CAPÍTULO I.

ANÁLISIS DEL CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL

Conforme se ha detallado en la “presentación” de la presente investigación de Tesis, debemos señalar que el análisis metodológico (expuesto en la Introducción), que desarrollamos nos permite detallar en primer término el “contexto problemático”, sobre la cual se ejecuta la evaluación teórica que hemos realizado.

Consideramos importante esta referencia porque en esencia, el alcance de una Acusación Constitucional es un “elemento teórico” muy amplio y que a pesar de la “amplitud” teórica, muy pocos especialistas la desarrollan.

En este contexto de evaluación, inclusive se han llegado a determinar sub elementos de análisis, que podrían generar una mayor amplitud de nuestra investigación, pero que se alejan de nuestros objetivos académicos.

A efectos de demostrar este punto, podemos señalar estos “sub elementos teóricos”, son:

- a) El análisis del *mandato imperativo*¹⁴, en la práctica parlamentaria.
- b) La incidencia penal y procesal del artículo 100° de la Constitución sobre la labor del Fiscal de la Nación, respecto de la formulación de la *denuncia penal* ante la Corte Suprema de Justicia de la República, tomando en cuenta que el Congreso sólo emite *documentos de carácter político-constitucional* y no siempre dichos documentos tienen un alcance objetivo en el ámbito procesal penal o penal¹⁵.
- c) La evaluación de la “inmunidad parlamentaria”.

¹⁴ Wieland Conroy, Hubert (2011) Representación, mandato imperativo e inmunidad parlamentaria. P. 279, En: *Gaceta Constitucional*. Tomo N° 40, abril 2011.

¹⁵ Fernández Segado, Francisco. Partidos políticos: representación parlamentaria e interdicción del mandato imperativo. P. 29, En: *Pensamiento Constitucional*. Año 2, N° 2, 1995.

Institución, que en esencia es una *prerrogativa constitucional* asignada a determinadas autoridades, que en la presente tesis son denominadas “Altas Autoridades”.

Señalamos estos puntos referenciales, por cuanto proyectamos su importancia en el momento de la sustentación de la Tesis y consideramos oportuno especificar que dichos ámbitos teóricos (importantes y referenciales) no son elementos principales de estudio en la presente tesis.

1. EL CONTEXTO PRELIMINAR QUE GUÍA LA INVESTIGACIÓN.

Toda vez que el panorama es sumamente complejo, detallaremos en un cuadro de “resumen”, los casos que puede generar una “acusación Constitucional, para lo cual detallaremos algunas referencias puntuales, que nos permiten limitar las referencias bibliográficas porque son de conocimiento público.

Entidad del Estado	Referencia respecto de un personaje	Asunto que provocó la Acusación Constitucional
Presidencia de la República	Alberto Fujimori	Renuncia al cargo de la Presidencia de la República por fax
	Alejandro Toledo	Registro de una hija extramatrimonial
	Alan García	a) Respecto de su primer mandato presidencial. En este tipo de situaciones hay muchas investigaciones, pero nunca se planteó una sanción efectiva ¹⁶ .

¹⁶ Castillo Gálvez, Jorge (1991) La acusación constitucional contra Alan García. Lima, ILS. P. 24

		b) Respecto de su segundo mandato presidencial: Registro de un hijo extramatrimonial (la Acusación Constitucional al final fue retirada por los mismos promotores de la acusación al no tener respaldo político)
	Ollanta Humala	Escándalo de las “agendas de Nadine Heredia”, respecto de Odebrecht
	Pedro Pablo Kuczynski	Escandalo de Odebrecht
Congresistas de la República ¹⁷	Los casos que son evaluados en la presente tesis	Se analizarán puntualmente estos casos en la Tesis
	Kenji Fujimori y otros	Filmaciones de reuniones con el Ejecutivo, respecto de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En este punto, la nota característica es que dichas grabaciones no contienen asunto penal, pero el debate penal está vinculado a la “negociación y chantaje político”, sobre la cual aún no se formula una

¹⁷ Sólo se plantean dos casos referenciales

		Acusación Constitucional
Poder Judicial	César Hinostroza Pariachi	Escándalo CNM-Audios
	César San Martín	
Ministerio Público	Pedro Chavarry	
CNM	Guido Águila	
	Iván Nogueira	

Como se puede observar, estas situaciones, tienen las siguientes características respecto de nuestro “tema de investigación”.

- a) Son de conocimiento público.
- b) Sólo existe una referencia bibliográfica para casos de *Jueces de la Corte Suprema de Justicia*, que puedan relacionarse al caso que actualmente se sigue contra César Hinostroza, el cual es detallado por Guillermo Olivera Díaz: el caso Perciles Sánchez¹⁸.
- c) Las referencias periodísticas, son mucho más amplias que la “información bibliográfica”, debido a estas condiciones:
 - c.1) La noticia es reciente y no permite una evaluación teórica sobre “los puntos controversiales”, en forma definitiva.
 - c.2) La noticia puede no ser vinculante con un contenido teórico y por ello, los especialistas en la materia optan por no desarrollar investigaciones sobre la materia.
 - c.3) No se ha llegado a determinar un “final” respecto de cada caso, y esto porque el trámite o el contexto problemático continúan.

En esta situación se detallan los casos de:

- i) Pedro Chávarry

¹⁸ Olivera Díaz, Guillermo (1989) *El caso Perciles: antejuicio contra 4 vocales supremos*. Lima, Editorial San Marcos. P. 67

De todos los casos que pudieran vincularse con el actual Fiscal de la Nación, sólo detallaremos los casos referenciales a situaciones de “negociación incompatible” con el cargo, toda vez que los hechos son previos a la asunción en el cargo de Fiscal de la Nación.

Los elementos contenidos en los CNM-Audios, por tanto sólo pueden constituir una acusación constitucional si se acredita que como Fiscal Supremo en la Fiscalía de la Nación, Pedro Chavarry ejecutó una infracción constitucional o un delito penal.

Consideramos que sólo podría aplicarse la *infracción constitucoinal*, porque como Fiscal Supremo, Pedro Chávarry ha actuado fuera de sus deberes funcionales ante otros personajes políticos y públicos, situación que ha provocado la pérdida de su autonomía e imparcialidad jurisdiccional.

ii) Iván Nogueira

Sólo podría evaluarse el comportamiento “indebido” del mencionado ex miembro del CNM, por cuanto no se ha acreditado la comisión de delito alguno.

Eventualmente estos comportamientos no están a la altura de quien debía tener una imagen proba y prudente.

iii) Guido Águila.

Vinculado sobre todo a la evaluación de delitos penales cometidos, como por ejemplo la ejecución de “actos preparatorios” para la comisión del delito de peculado (utilización de fondos públicos para fines privados) y el *tráfico de influencias*.

- iv) César Hinostroza Pariachi
Sobre el personaje más conocido en la actualidad, correspondería evaluarse tanto una infracción constitucional como la acusación por cometer delito, al evidenciarse caso de *tráfico de influencias*, de no actuar con probidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
 - v) César San Martín.
Respecto del caso de *tráfico de influencias*, al acreditarse una situación de “motivación” e influencia en la labor jurisdiccional para la atención de un trámite judicial privado.
- i. Los casos detallados no han provocado una *denuncia constitucional* seguida por el trámite invocado por el Ministerio Público y el Poder Judicial ante el Congreso de la República.
- Téngase en cuenta que los límites de tiempos, plazos, procedimientos nos permiten “seleccionar” un tema, periodo y nivel de contexto para la representación del “problema en la presente tesis”.
- ii. Las actuaciones de los Congresistas de la República no son definitivas, y por ello ni la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, ni las Comisiones de Constitución, Justicia, de “Investigaciones especiales” como la de Odebrecht, han formulado una posición final y todo ello hasta agosto de 2018.
- iii. La connotación política, las alianzas políticas entre diferentes sectores en el ámbito parlamentario, no permiten ejecutar una proyección sobre el “resultado final” de cada uno de estos casos, pudiendo generarse situaciones totalmente diferentes entre sí.

Sobre esta realidad, es que consideramos oportuno detallar que nuestro tema de tesis, representa un contexto sumamente específico, al limitarnos sólo a casos en los cuales se detallen *sentencias judiciales finales (cosa juzgada)* sobre casos de Acusación Constitucional tramitados en el Congreso de la República.

2. LA DEBILIDAD INSTITUCIONAL EN LA POLÍTICA NACIONAL.

Uno de los aspectos más puntuales que se detallan en este ámbito específico, está detallado por la *realidad de los partidos políticos*, los cuales participan en la vida política nacional.

En este punto, debemos detallar la referencia de este punto específico con respecto del objetivo central de nuestra tesis, por cuanto la principal limitación para la materialización de un *procedimiento parlamentario*, se debe a la propia acción directa e indirecta de los Congresistas de la República para no desarrollar dicho procedimiento.

Las razones que nos permiten detallar esta situación provienen de la propia condición en la cual se desarrollan los *partidos políticos*, y por ello es que ante situaciones de *registro evidente* de situaciones o delictivas o indecorosas en el ámbito político, los resultados han sido totalmente disímiles.

En tal sentido podemos señalar los siguientes elementos de evaluación:

Congresista de la República	Partido Político	Tema controversial
Omar Chehade ¹⁹	Gana Perú	<p>Tráfico de Influencias.</p> <p>La refeencia nos permite detallar que este congresista renunció a la Vicepresidencia de la República por el “asunto controversial” donde no se desarrolló ninguna Acusación Constitucional.</p> <p>Corresponde detallar que nunca se generó ninguna sanción parlamentaria contra este Congresista a pesar que por los mismos hechos, su hermano fue condenado por “tráfico de influencias”.</p> <p>Su hermano, Miguel Chehade, quien participó en los mismos hechos fue condenado por el Poder Judicial por el mismo delito que cometió su hermano, sobre quien no hay sentencia alguna ni sanción alguna²⁰.</p>
Yesenia Ponce ²¹	Fuerza Popular (Fujimorismo)	<p>Adulteración de la hoja de vida, delito contra la fe pública.</p> <p>En este caso el JNE ha procedido a iniciar un trámite de denuncia por falsedad genérica pero existe la prerrogativa de la</p>

¹⁹ RPP (2012) Omar Chehade renuncia a la segunda vicepresidencia de la República. Recuperado el 16/01/2012 de <https://rpp.pe/politica/actualidad/omar-chehade-renuncia-a-segunda-vicepresidencia-de-la-republica-noticia-441492>

²⁰ LA REPÚBLICA (2013) *Miguel Chehade es condenado a tres años de prisión por caso Andahuasi*. Ubicado el 27/08/2013 de <https://larepublica.pe/politica/734421-miguel-chehade-es-condenado-a-tres-anos-de-prision-por-caso-andahuasi>

²¹ EL COMERCIO (2018) *Oficializan sanciones contra Yesenia Ponce, Carlos Bruce y Maritza García*. Ubicado el 25/01/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/oficializan-sanciones-yesenia-ponce-carlos-bruce-maritza-garcia-noticia-nndc-550468>

		inmunidad parlamentaria de la Congresista y por ello no se ejecuta el proceso penal ²² .
Elard Melgar		Plagio de tesis para titularse como abogado
Luis Yika		No incluyó en su hoja de vida un proceso penal en trámite por denuncia por estafa a entidad bancaria
Hector Becerril		Tráfico de Influencias (caso Azucarera Tumán) Denuncia por interferir en la autonomía del CNM.

Estos casos²³ tienen las siguientes condiciones y nos permiten sostener nuestra posición:

a) Son casos que vienen de un “hecho delictivo”.

Todos estos casos constituyen elementos propios del *ámbito penal de evaluación* y han provocado una controversia en el ámbito jurisdiccional y fiscal pero donde no se ha continuado o no se ha desarrollado una acción final de nivel jurisdiccional.

b) Son casos que no han provocado una “Acusación Constitucional”.

La mayoría de los casos en mención han sido tramitados en la Comisión de Ética Parlamentaria²⁴ y no han provocado ninguna “recomendación” de imposición de sanción en cada caso evaluado.

c) Los casos controversiales al ser evaluados por la Comisión de Ética limitan la interposición de una “Acusación Constitucional” a pesar de los registros que detallan hechos de naturaleza penal.

El caso más representativo en este punto es el de la Congresista Yesenia Ponce, sobre quien se ha probado que los *documentos de su file académico*

²² EL COMERCIO (2018) *¿Hasta donde es responsable el JNE en la elección de candidatos?* Ubicado el 25/04/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/responsable-jne-seleccion-candidatos-noticia-514732>

²³ LUCIDEZ (2017) *Cinco congresistas con denuncias realmente graves*. Recuperado el 11/11/2017 de <http://lucidez.pe/politica/5-congresistas-con-denuncias-realmente-graves-que-fueron-archivadas/>

²⁴ EL COMERCIO (2017) *Comisión de ética archivó ocho denuncias contra congresistas de Fuerza Popular*. Recuperado el 02/09/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/comision-etica-archivo-ocho-denuncias-congresistas-fuerza-popular-noticia-450169>

escolar, han sido fraudulentos, no pudiendo la mencionada parlamentaria probar “la validez de los documentos” que ella misma ha presentado en su etapa de postulante al cargo de Congresista de la República en las elecciones generales en el año 2016.

Una situación diferente es la representada por la Congresista Maritza García, de Fuerza Popular, quien ha sido sancionada por la Universidad Nacional de Piura con la anulación del título de abogada, así como los grados de Bachiller y de Magister, obtenidos en dicha casa de estudios, por acreditarse la condición de *plagio de tesis*, tanto en la licenciatura como en el postgrado²⁵.

Esta situación no ha sido detallada en el cuadro anterior, por cuanto la mencionada Congresista no ha sido sometida a ninguna investigación en el Congreso de la República.

Frente a este contexto, es de evidenciarse una relación negativa entre las situaciones proclives a desmejorar la imagen del Congreso de la República con la propia acción institucional del primer poder del Estado²⁶.

La referencia en este punto nos permite detallar que las condiciones impuestas por las agrupaciones políticas que participan en el Congreso de la República constituye el principal elemento que condiciona negativamente la práctica parlamentaria, y por ello ante situaciones muy próximas al delito, los resultados no han provocado situaciones que conlleven a una Acusación Constitucional.

3. LA DEBIL RELACIÓN ENTRE GOBERNABILIDAD Y DEMOCRACIA.

El detalle de la razón por la cual el Congreso de la República no asuma un rol mucho más activo en la tutela de los intereses de la propia institucionalidad del Congreso se debe a la referencia anteriormente expuesta.

Ante esta situación es que surgen algunos elementos que finalmente incidirán en nuestro tema de estudio, los cuales son:

²⁵ LA REPÚBLICA (2017) *Maritza García: Anulan título y grados a fujimorista por certificado falso*. Recuperado el 20/12/2017 de <https://larepublica.pe/politica/1160246-maritza-garcia-anulan-titulo-y-grados-a-fujimorista-por-certificados-falsos>

²⁶ LA REPÚBLICA (2018) *Sólo el 12% aprueba al Congreso*. Recuperado el 10/08/2018 de <https://larepublica.pe/politica/999597-el-64-de-los-peruanos-desaprueba-desempeno-del-congreso>

a) Existe una débil institucionalidad parlamentaria.

Las organizaciones políticas con mayor número de congresistas no son “partidos políticos” orgánicamente estructurados, con una filiación partidaria histórica o sujeta a una línea de acción política definida.

En esencia partidos como los que actualmente están en el Congreso de la República, son partidos de *caudillos políticos*, sujetos a las condiciones coyunturales de las elecciones.

El propio partido político del actual gobierno, “Peruanos por el Cambio”, constituye una referencia de este punto, por cuanto los parlamentarios de dicha Bancada Parlamentaria no están vinculados por una única línea de acción política, al provenir de diferentes organizaciones políticas.

En el caso de Fuerza Popular, los congresistas no sólo provienen de las filas del fujimorismo tradicional sino también de las simpatías políticas con Keiko Fujimori y su familia, por ello es posible registrar casos de parlamentarios sin mérito profesional o personal alguno que actualmente son Congresistas.

b) Existe una desidia política.

Los Congresistas de la República, lejos de tomar en cuenta la importancia del cargo, ejecutan situaciones próximas a la acción de limitar la imagen pública del primer poder del Estado.

En este tipo de situaciones provocan actos como:

b.1) Adulteración contable en perjuicio del Congreso. El caso del “come pollo”, es una evidencia de este punto y por ello nos permite desarrollarlo puntualmente.

b.2) Situaciones de Acoso Sexual no denunciados políticamente: el caso de Moises Mamani representa este hecho, sobre la cual no se ha registrado ninguna acción del Congreso de la República contra el denunciado, quien además “denunció” a su acosada²⁷.

²⁷ DIARIO CORREO (2018) *Ex asesora de Moisés Mamani denuncia acoso del congresista*. Ubicado el 26/03/2018 de <https://diariocorreop.com/politica/exasesora-moises-mamani-denuncia-acoso-congresista-despidio-estando-embarazada-810102/>

b.3) Situaciones de maltrato personal.

La denuncia más conocida ha sido la que se desarrolló en el caso “Lava pies” provocado por la ex Congresista Rosario Sasieta Morales, quien paradójicamente se presenta como “la Señora Ley”.

Al final de la denuncia, el Congreso de la República no ejecutó ninguna sanción contra la mencionada congresista.

El caso dio un giro inesperado cuando la propia ex parlamentaria denunció por difamación a su ex asesora, generándose una condena penal contra quien denunció la práctica de maltrato personal con un video y pruebas sobre las acciones de Rosario Sasieta²⁸.

Otro caso fue el provocado por ex Congresista, Víctor Mayorga, quien obligada a su personal a ejecutar labores de “servicio doméstico”: planchar ropa²⁹.

Sobre el particular, nunca se registró sanción alguna.

4. LOS DIFERENTES CONTEXTOS DE EVALUACIÓN (DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO)

Conforme se ha podido explicar en los puntos precedentes, en particular en la evaluación del cuadro en el cual se detalla la referencia a “institución del Estado”, “personaje involucrado en un contexto político-constitucional” y “los hechos materia de evaluación”, debemos detallar que se puede detallar el siguiente cuadro que explica las diferentes situaciones que es puede producir.

²⁸ LA REPÚBLICA (2014) *Caso Lava Pies. Sentencia a dos años a ex trabajadora*. Ubicado el 09/01/2014 de <https://larepublica.pe/politica/764045-caso-lava-pies-sentencian-a-dos-anos-de-prision-suspendida-a-mujer-que-difamo-a-rosario-sasieta>

²⁹ RPP (2019) *Congresista Mayorga obligó a asistente a planchar su ropa*. Ubicado el 27/09/2009 de <https://rpp.pe/politica/actualidad/congresista-mayorga-obligo-a-asistente-a-planchar-su-ropa-denuncian-noticia-211781>

Elementos de evaluación	Situación a la Acusación Constitucional	Evaluación en el ámbito judicial
Los casos materia de evaluación en la presente tesis	Se registró una Acusación Constitucional	Sentencia firme, en dos niveles: a) Condena penal impuesta. b) Declaración de prescripción del delito sometido a evaluación
Casos de ex Presidentes de la República	Alberto Fujimori	Se registra condena penal
	Alejandro Toledo	No se registró proceso judicial alguno
	Alan García Pérez	
	Ollanta Humala	
	Pedro Pablo Kuczynski	
Poder Judicial	César Hinostroza	No se ha iniciado el procedimiento de evaluación de la Acusación Constitucional
Miembros del CNM	Guido Águila Iván Nogueira	

Este cuadro representativo de la “realidad problemática” en evaluación nos permite identificar nuestro “universo” y “muestra” de estudio, por cuanto ejecutar una indagación sobre casos que constituyan todos los elementos teóricos y aplicativos de la presente investigación no son muy amplios.

Adicional a ello se debe señalar que en el caso de los *procedimientos parlamentarios en donde se desarrolla una Acusación Constitucional*, por la propia reserva que solicitan las personas que tienen *prerrogativas constitucionales, como la inmunidad*

parlamentaria, es que la información no es publicada en el portal web del Congreso de la República.

En este sentido, la “información” proviene de los medios de prensa porque ni los propios especialistas en derecho parlamentario tienen acceso al contenido de los *Dictámenes* que se desarrollan en las diferentes instancias parlamentarias.

De este modo, no es posible acceder al contenido de dichos *Dictámenes*, los cuales contienen:

- a) La acusación³⁰, conforme su propia descripción. Esta acusación puede ser en dos niveles:
 - a.1) Por haberse ejecutado una infracción constitucional.
 - a.2) Por haberse desarrollado una situación de naturaleza delictiva. Corresponde detallar en este ámbito que la *infracción constitucional*, es un “elemento normativo abierto”, el cual está descrito en el artículo 99º de la Constitución y no ha sido desarrollado en:
 - i. El Reglamento del Congreso de la República.
 - ii. Norma jurídica alguna.
- b) La referencia del ente o personaje que formula la acusación³¹. En este ámbito, sólo cuando los congresistas de la República formulan una “acusación constitucional” es que es difundida la misma, por la propia acción del denunciante.

Cuando el Ministerio Público formula la “acusación constitucional” sólo se publica la referencia de la “denuncia” más no el contenido de la misma.
- c) La descripción del *motivo de la denuncia*.

En esencia este punto permitirá sustentar el “petitorio” del denunciante, pero ello no logra ser conocido por el *público* en forma general.

³⁰ Bermúdez Tapia, Manuel (2007) La responsabilidad parlamentaria y los procedimientos parlamentarios sancionatorios. P. 19, En: Revista Jurídica del Perú, N° 76, junio 2007.

³¹ Revista Parlamentaria (2012) ¿Crisis legislativa? Negociación, procedimiento e inmunidad, p. 15. En: *Revista Parlamentaria*. Vol. 19, N° 1, junio 2012.

d) La eventual acción a ejecutarse en el Congreso de la República³².

La cual está vinculada a la facultad sancionatoria del Congreso de la República y puede contener desde una “llamada de atención” hasta la “inhabilitación en el ejercicio de función pública”.

e) El trámite a seguir³³.

Por lo general sólo se hace referencia a los artículos 99º y 100º de la Constitución Política de 1993 y no se detalla el *procedimiento a ser ejecutado*³⁴.

Este punto es el elemento central de nuestra tesis y nuestro objetivo central, toda vez que planteamos un mecanismo específico que atiende este punto problemático en forma directa, objetiva, procedimental y en base a la estructura normativa existente.

Igualmente este punto nos permite justificar y proyectar la importancia de nuestro tema de estudio en la tesis.

³² Mora Donatto, Cecilia (2008) El procedimiento legislativo y el trabajo de las comisiones parlamentarias en el Congreso Mexicano. P. 22, En: *Derecho y Sociedad*, Año 19, N° 31, diciembre 2008

³³ Congreso de los Diputados (1997) *El procedimiento legislativo*. Madrid, Congreso de los Diputados, p. 248

³⁴ RAE JURISPRUDENCIA (2012) Inmunidad parlamentaria, p. 3, En: *RAE Jurisprudencia*. Año 4º, Tomo 45, marzo 2012

CAPÍTULO II.

ANÁLISIS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL-PENAL Y EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.

Explicado el *contexto problemático* sobre el cual se desarrolla nuestra investigación en la presente Tesis, debemos señalar algunas características particulares que se desprenden de la “Acusación Constitucional”.

En esencia, este punto permite detallar tanto elementos de naturaleza constitucional como penal y procesal penal, todo lo cual nos permite identificar *elementos comunes*, sobre las cuales deben desarrollarse técnicas y procedimientos que no afecten los derechos fundamentales de las personas sometidas a estos procedimientos y que permitan legitimar el rol sancionador del Estado, en cualquiera de sus niveles:

a) A nivel fiscalizador.

Principalmente por dicha función proviene de la interpretación literal del artículo 97° de la Constitución³⁵.

En este ámbito, queda bajo función parlamentaria la ejecución de actos de fiscalización política sobre cualquier entidad del Estado y ello involucra a sus autoridades: las Altas Autoridades, para efectos de la presente tesis³⁶.

b) A nivel sancionador.

Toda vez que puede imponer sanciones de carácter administrativo parlamentario³⁷.

La suspensión en el ejercicio de funciones es una muestra de este punto, y se detalla del artículo 95° de la Constitución.

³⁵ Mora Donato, Cecilia (2008) *El procedimiento legislativo en México*. México, UNAM, p. 43

³⁶ Riascos Bernal, Luis (1976) *De la inmunidad parlamentaria*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, p. 77

³⁷ Latorre Boza, Derick (2008) Inmunidad parlamentaria, p. 163. En: *Derecho y Sociedad*, Año 19, N° 31, diciembre 2008

c) A nivel punitivo.

Incluye tanto los alcances del artículo 95° de la Constitución como los actos de *inhabilitación en el ejercicio de la función pública*³⁸, que se detallan de una complementación de varios artículos constitucionales.

Así por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, se registra una sanción de inhabilitación de 10 años³⁹, en los cuales el mencionado sancionado no puede ejercer actividad pública en el Estado.

En el mismo sentido se pueden detallar casos diferentes recaídos en Congresistas de la República, como José Luna (suspendido), Martha Chávez⁴⁰(inhabilitada), entre otros.

d) A nivel preventivo.

Situación complementaria al punto precedente y se presenta como un *elemento de prevención en el ámbito político*, como lo detalla José Gómez Sarmiento⁴¹.

Como se podrá observar, estos elementos constituyen elementos que usualmente no son registrados en la bibliografía especializada en la materia y por ello la importancia del presente capítulo en la Tesis, nos permite detallar una complementación de áreas de trabajo de suma especialización.

Por tanto, los alcances teóricos tanto constitucionales como penales y procesales penales, sólo estarán vinculados a la línea temática de la presente Tesis, señalándose de forma preliminar que no se ejecutará el análisis particular e incidental de algunos “temas o conceptos” ajenos a la línea de trabajo de la Tesis para no generar un trabajo de investigación que contenga elementos “referenciales” tratados con mayor amplitud que los “temas de mayor importancia”.

³⁸ Sánchez Marín, José (1990) *La inmunidad parlamentaria en el Perú*. Tesis para optar el grado de Bachiller, Facultad de Derecho, PUCP. P. 137

³⁹ Gutierrez Ticse, Gustavo (2016) *La inmunidad parlamentaria en el Estado democrático constitucional: un estudio a partir del caso peruano*. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional en la PUCP. p. 31

⁴⁰ CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2001) *Acusación constitucional contra congresistas*. Ubicado el 20/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/actas/FAA1A12F941F11C705256D810053DB6E>

⁴¹ Gómez Sarmiento, José (1985) *La inmunidad parlamentaria en Colombia*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, p. 149

1. LA DETERMINACIÓN DEL TEMA CONSTITUCIONAL Y PENAL EN EL ESTUDIO DE LA TESIS.

Para la *identificación de un tema central* de investigación, señalamos que hemos optado por ponderar el caso de *congresistas con Acusación Constitucional que han provocado la imposición de una sentencia por parte del Poder Judicial con carácter de cosa juzgada, sobre el hecho que provocó la acción parlamentaria*, en este sentido, excluimos:

- a) Los casos en los cuales se debate el artículo 113° de la Constitución, en la cual se debate la *incapacidad del Presidente de la República* respecto de una situación de vacancia presidencial.

Este hecho parte del elemento temporal de evaluación por cuanto sólo en el caso de Alberto Fujimori se podría evidenciar una “relación” entre el *procedimiento parlamentario de Acusación Constitucional* con la acción final del *Poder Judicial*.

En el caso de Pedro Pablo Kuczynski eventualmente esta situación podría darse pero no nos permite evaluar los tiempos en el presente trabajo de tesis, razón por la cual se excluye este punto de referencia.

- b) Los casos de Altas Autoridades ajenas al contexto del Congreso de la República.

Esto porque todos los personajes, vinculados

- i. Caso de Petro Audios⁴².

De connotación penal pero sobre la cual nunca se desarrolló una *sanción penal efectiva*, debido a la prescripción del delito.

- ii. Caso Odebrecht⁴³.

- iii. Caso CNM Audios.

⁴² Gorriti, Gustavo (2009) *Petroaudios, políticos, espías y periodistas*. Lima, Planeta, p. 35.

⁴³ Solís López, Augusto (2017) *Odebrecht y la IIRSA norte y sur*. Tesis para optar el grado de maestría en Derecho Penal en la PUCP. p. 41.

Están siendo sometidos a investigaciones en el Congreso de la República y aún no se determina su *resultado* final y por ende no se puede prever cómo actuará el Congreso de la República.

Ante ello, una situación de proyección no podría validar un trabajo de investigación de tesis y por ello es que sólo nos hemos limitado a casos en los cuales se registran casos de sentencias judiciales firmes tanto a nivel condenatorio como a nivel de declaración de prescripción del caso y con ello la finalización del proceso penal.

Esta referencia nos permite centrarnos en la actividad parlamentaria, en particular en el desarrollo de los *procedimientos parlamentarios*, por cuanto en el ámbito de la *gestión pública*, es necesario detallar que todas las “acciones y actividades” de todo organismo público del Estado, están determinados en forma precisa en una norma en específico.

Así en la administración pública, todas las entidades se desarrollan sobre la base de su *normatividad administrativa* especial (la que se desarrolla en la propia entidad) como también siguiendo lo dispuesto por la *legislación general* aplicable al respecto.

Así la complementación de disposiciones, como:

- a) La Constitución.
- b) El Código Civil, como norma supletoria.
- c) El Código Procesal Civil, como norma supletoria.
- d) La Legislación de carácter administrativa, en particular la Ley N° 27444, Ley de procedimiento contencioso administrativo.
- e) La legislación particular y especial.
- f) La normatividad emitida por la propia entidad.

Permiten *estructurar el modo de trabajo* en el cual se desarrolla una entidad pública.

El incumplimiento de estas disposiciones puede provocar situaciones negativas y negligentes con respecto de la propia actividad del Estado, provocando una situación que puede ser denunciado por el propio sujeto sometido a trámite en la entidad pública.

Dicha situación se ajusta en forma precisa a nuestro tema de estudio, por cuanto las *imprecisiones en la determinación del procedimiento de formulación de la*

acusación constitucional constituyen un elemento “abierto” que no ha sido predeterminado por el propio Congreso de la República y ello puede ser cuestionado por una persona, al afectarse el principio de legalidad y del seguimiento de las reglas del debido proceso.

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO CONSTITUCIONAL Y POLÍTICO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1993.

La importancia del análisis del contexto constitucional en el cual fue promulgada la Constitución de 1993 y la referencia a la Constitución de 1979, son importantes para el desarrollo de la presente tesis, en particular por los siguientes elementos referenciales:

- a) Se trata de un análisis muy limitado al contexto nacional, toda vez que la *práctica parlamentaria* puede ser muy similar en la región de América Latina, pero los contextos políticos hacen al caso peruano muy particular⁴⁴.
- b) El quiebre de la Constitución de 1979, se debió al golpe de Estado promovido por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 y sobre la cual se diseñó la ejecución de un Proceso Constituyente para así tener una nueva Constitución.

Corresponde detallar que en la Constitución de 1979, se regulaba en forma precisa la opción del *pueblo* de ejecutar una *insurgencia*, conforme detalla el artículo 82 de la mencionada norma y dicho antecedente era negativo a los intereses del propio Alberto Fujimori y por ello, este *derecho natural* del pueblo⁴⁵, conforme el *Contrato Social*, fue excluido del contenido normativo de la Constitución de 1993.

Una situación muy similar en cuanto al origen, por cuanto el Congreso Constituyente de 1978 especificó esta regulación en base a la necesidad de evitar una próxima

⁴⁴ Alcántara Suarez, Manuel (2005) *Funciones, procedimientos y escenarios: un análisis del poder legislativo en América Latina*. Salamanca, Universidad de Salamanca, p. 307

⁴⁵ Torres Márquez, Juan Carlos. El Derecho de insurgencia, un arma de índole constitucional. En: *Ius Et Veritas*, N° 20, p. 465

situación de golpe de Estado promovida por los militares quienes habían convocado la reapertura democrática⁴⁶.

- c) Tanto en la Constitución de 1979 y la de 1993, *no existe* regulado el procedimiento parlamentario de Acusación Constitucional.
- d) Tanto en las Constituciones de 1993 como en la de 1979, se ha regulado la condición excluyente a favor del *parlamentario* con la regulación de que no están obligados a *mandato imperativo*, motivo por el cual se considera que esta “facultad” otorga mucha amplitud de criterios y de acciones en el ámbito del procedimiento y práctica parlamentaria.
- e) En el Reglamento del Congreso de la República, norma que desarrolla el Título IV, Capítulo I, Poder Legislativo, de la Constitución Política no se detalla ningún procedimiento parlamentario vinculado a la esfera punitiva del mismo⁴⁷.

En este sentido, debemos destacar que los *procedimientos parlamentarios*, detallados son los siguientes:

- i. Procedimiento parlamentario para regular los derechos de los Congresistas.
- ii. Procedimientos Parlamentarios para regular la comunicación del Congreso de la República con las autoridades del Congreso de la República: Mesa Directiva.
- iii. Procedimientos Parlamentarios para regular la comunicación y fiscalización parlamentaria a entidades públicas.

⁴⁶ Mauceri, Philip (1989) *Militares: insurgencia y democratización en el Perú*. Lima, IEP, p. 15

⁴⁷ UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA (2010) *Estudios sobre el Congreso Peruano: grupos parlamentarios, disciplina partidaria y desempeño profesional*. Lima, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, p. 21

- iv. Procedimiento parlamentario para la promulgación de normas (artículo 64° del Reglamento)
- v. Procedimiento parlamentario para la ejecución del control sobre el Poder Ejecutivo (Artículo 64° del Reglamento)
- vi. Procedimientos parlamentarios para la ejecución del nombramiento de Altas Autoridades: Miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva (artículo 6° y artículo 64° del Reglamento)

Inclusive este trámite no es preciso, pero al menos se registra una regulación específica sobre el particular.

Citamos en forma expresa el contenido del artículo 64 del Reglamento del Congreso de la República:

CAPÍTULO VI Procedimientos Parlamentarios

SECCIÓN PRELIMINAR Disposiciones Generales

Definición y clases

ARTÍCULO 64. Los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos del Congreso destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político y designaciones y nombramientos. Pueden ser:

- a) Procedimiento Legislativo; que comprende el debate y aprobación de leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas para ejercer la legislación delegada, leyes presupuestales y financieras, leyes de demarcación territorial, leyes de reforma de la Constitución Política, del Reglamento del Congreso y de resoluciones legislativas.*

- b) Procedimientos del Control Político; que comprende la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a los Ministros, la invitación a los Ministros para que informen, las preguntas a los Ministros, la solicitud de información a los Ministros y a la administración en general, la censura y la extensión de confianza a los Ministros, la investigación sobre cualquier asunto de interés público, la dación de cuenta y el antejuicio político.*
- c) Procedimientos Especiales; que comprende la designación del Contralor, la elección del Defensor del Pueblo, de los miembros del Tribunal Constitucional y de 3 miembros del Directorio del Banco Central de Reserva, así como la ratificación del Presidente de dicho Banco y del Superintendente de Banca y Seguros.*

vii. Procedimientos parlamentarios para el reemplazo de un Congresista, o por vacancia o por fallecimiento del titular.

Por tanto, esta referencia nos permite detallar que este punto en particular *sí está expresamente detallado en el Reglamento del Congreso de la República*, pero se debe informar que no se registra una mayor incidencia en otros ámbitos ajenos a lo previsto en el artículo 64° del Reglamento.

Una situación que nos permite sostener que nuestro tema de investigación es absolutamente novedoso y se demuestra en el hecho de que el artículo inmediato siguiente al descrito en los “procedimientos parlamentarios”, sólo hace referencia a los “instrumentos procesales parlamentarios” (artículo 65° del Reglamento del Congreso).

Instrumentos procesales parlamentarios

ARTÍCULO 65. Son instrumentos procesales parlamentarios las proposiciones parlamentarias y los dictámenes e informes de las Comisiones.

3. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES GUÍA EN LA EJECUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA.

Una vez descrito el contexto en el cual se desarrolla un *procedimiento parlamentario* resulta conveniente detallar que más allá del cargo que ostenta la “Alta Autoridad” que puede ser sometida a este procedimiento, es una *persona* sobre la cual el Estado debe garantizar un trámite justo y diligente en lo procesal y procedimental.

Ante esta situación es que corresponde detallar que este punto es uno de los más representativos cuando se debatió la Acusación Constitucional que provocó la primera comparecencia del Presidente Pedro Pablo Kuczynski ante el Congreso de la República: el respeto al debido proceso⁴⁸.

Los análisis de los plazos, de las condiciones y de los procedimientos protocolares eventualmente resultaban *ser casuísticos* y nos permiten observar un contexto muy negligente en el ámbito del procedimiento parlamentario que podría en su momento haber provocado una *vacancia del mandato presidencial* y por ello nuestra inquietud se centra en evaluar un contexto absolutamente objetivo y procedimental para así garantizar el principio de legalidad y los demás principios de orden constitucional y procesal en este tipo de situaciones.

Un punto en particular que nos permite detallar en forma sucinta los siguientes elementos, que serán adaptados a la realidad del tema en evaluación en la Tesis:

a) El Cumplimiento Al Principio De Legalidad.

Principio que se desarrolla en base al artículo 2° de la Constitución, inciso 24°, punto d), sobre la cual la “libertad” personal no puede estar supeditada a “normas abiertas” o “normas penales en blanco”, que en el csao parlamentario nos permiten detallar la *existencia de un vacío normativo*,

⁴⁸ Abad Yupanqui, Samuel (2013) El derecho al secreto de las comunicaciones. Alcances, límites y desarrollo jurisprudencial. P. 11, En: *Pensamiento Constitucional*. Vol. 16, N° 16, 2012.

conforme se detalla del análisis del artículo 64° del Reglamento del Congreso de la República⁴⁹.

b) El Cumplimiento De La Presunción De Inocencia.

Tomando en cuenta el mismo contenido del punto precedente y sobre la cual se detalla la importancia de no ejecutar *actos que impliquen un nivel sancionatorio* si previamente no existe un parámetro normativo que lo regule en forma expresa.

En este ámbito, a diferencia del contexto penal, debemos señalar que los *procedimientos parlamentarios de Acusación Constitucional*, no necesariamente contienen elementos penales o procesales penales, por cuanto es viable proceder a una acusación sin vincular o hacer referencia a un hecho delictivo.

El mejor ejemplo se puede materializar en la Acusación Constitucional contra Alberto Fujimori, en un momento en el cual no se sabía la información completa sobre su participación con los delitos de Vladimiro Montesinos durante su gobierno y por ello a la renuncia por fax a la Presidencia de la República se procedió a evaluar la *Acusación Constitucional* sobre su “renuncia”, dado que no cumplía el protocolo de acciones, al haberse solicitado el permiso del Congreso para el retiro del país por una actividad oficial.

c) El Respeto a la Tutela Jurisdiccional Político Parlamentaria Efectiva

Tomando en cuenta el próximo contexto sobre el cual se desarrolló la “defensa” del ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski, en la primera petición de vacancia en el cargo por incapacidad moral en el año 2017.

d) Debido Proceso

Sobre los mismos elementos del punto precedente y sobre los cuales Reynaldo Bustamante detalla referencias de orden supra nacional,

⁴⁹ Canez Marticorena, Alfredo (2001) *Procedimientos parlamentarios de investigación y de acusación constitucional*. Lima, Alternativas, p. 49.

principalmente por la acción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁵⁰.

e) Derecho a La Defensa

Sobre los mismos elementos conceptuales y referenciales de los dos puntos precedentes.

Como se puede observar, el análisis complementario entre los ámbitos penales y procesal penal sobre el aspecto constitucional no son elementos intrascendente y para efectos de su exposición presentamos elementos objetivos y de conocimiento público para así hacer evidente el ámbito temático en evaluación.

Sostenemos que estos elementos referenciales nos permiten detallar no sólo un aspecto teórico de importancia, sino nos permiten detallar que no existen elementos normativos y bibliográficos sobre el punto medular de la presente tesis.

Debemos sostener en este sentido, que la bibliografía referencial nos permite detallar nuestra posición y nos permite también sostener de modo directo lo expuesto por la propia doctrina, sin la necesidad de hacer referencias puntuales sobre “elementos teóricos” empleados, con lo cual nuestra investigación es *aplicativa*, por cuanto hemos ejecutado la sistematización de la información para así exponer sólo nuestro punto de vista, el cual resulta fundamentado, objetivo y es específico.

4. LA DIVISIÓN DE INSTANCIAS Y TRÁMITES PARLAMENTARIOS.

Luego de analizar el contexto situacional, donde:

- a) El Congreso de la República, en su propio Reglamento, no especifica el trámite o procedimiento parlamentario para formular una Acusación Constitucional.
- b) La Constitución Política de 1993 no detalla un procedimiento específico para regular la Acusación Constitucional.

⁵⁰ Bustamante, Reynaldo (2003) El debido proceso en los procedimientos parlamentarios: a propósito de una jurisprudencia de la CIDH, p. 78, En: *Proceso y Justicia*, N° 4, 2003.

Debemos detallar la importancia de analizar la *práctica parlamentaria*, que difiere en esencia de la práctica jurisdiccional por su naturaleza política y constitucional, muy diferente al ámbito de evaluación jurisdiccional en especialización temática que se desarrolla en el Poder Judicial y Ministerio Público.

Así el estudio del “Congreso de la República” nos permite analizar los siguientes elementos de su *práctica parlamentaria*:

a) Pleno Del Congreso.

Es el órgano colectivo del Congreso de la República, está conformado por los 130 Congresistas de la República.

b) Mesa Directiva.

Es el órgano de gobierno del Congreso de la República.

c) Junta De Portavoces.

Es el órgano de gobierno para el *trámite parlamentario de las sesiones del Pleno del Congreso de la República*.

No tiene mayor vinculación con los órganos de gobierno del Congreso y no puede disponer ninguna acción sobre el Pleno del Congreso, en particular cuando no se trata de sesiones del Pleno del Congreso.

Está vinculado sobre todo al debate, análisis y regulación del *trámite de temas a tratar* en las sesiones parlamentarias.

Por ello puede disponer la “suspensión de una votación” o puede “exonerar la segunda votación”, si es que los “Portavoces” optan por flexibilizar el trámite parlamentario, que sucede generalmente cuando hay “acuerdo mayoritario” sobre un punto en particular.

d) Trámites A Cargo De Comisiones Determinado Por Oficialia Mayor.

Es el procedimiento ordinario por las “Comisiones” del Congreso de la República.

El orden de atención y el volúmen de las inicialativas legislativas a tratar dependen del trámite administrativo que dispone la Oficialía Mayor, entidad que es parte de la estructura administrativa del Congreso de la República.

e) Las Comisiones Parlamentarias.

Son las entidades que emiten “Dictámenes” en el Congreso de la República, y son los únicos entes que pueden formular peticiones sobre iniciativas legislativas a debatir en el Pleno del Congreso de la República.

Los Congresistas en forma autónoma no puede plantear una iniciativa legislativa si no existe una opinión desarrollada en un Dictamen en estas Comisiones.

Para el estudio de este punto, evaluaremos individualmente cada “comisión parlamentaria”, que tiene vinculación con el tema de tesis.

i. La Comisión De Constitución

Es la Comisión que se encarga de todos los asuntos de naturaleza constitucional en el Congreso de la República.

ii. La Sub Comisión De Acusaciones Contitucionales

Es el sub grupo de trabajo que proviene de la conformación de la Comisión de Constitución y que redacta la Acusación Constitucional, conforme los artículos 99° y 100° de la Constitución.

iii. La Comisión De Fiscalización

Es la Comisión que ejecuta las investigaciones a las entidades públicas y privadas a iniciativa del Congreso de la República.

iv. La Comisión Especial De Investigación

Son Comisiones multisectoriales y multipartidarias que ejecutan una investigación específica.

En este caso, por ejemplo se pueden citar los casos de las Comisiones Especiales que han visto los casos de los Petro Audios y del caso Odebrecht.

v. La Comisión De Ética Parlamentaria.

Es la Comisión que evalúa el “comportamiento parlamentario” y no tiene una función específica en el Reglamento del Congreso de la República, situación que le permite modificar su *reglamento interno* anualmente.

vi. La Comisión De Justicia.

Es la Comisión que evalúa los *informes legales* emitidos por los órganos que conforman el Estado, especialmente cuando existe una controversia de naturaleza que involucra a Altas Autoridades en el Estado, conforme los alcances de la presente tesis.

vii. La Comisión Permanente.

Es la *representación porcentual* del Congreso de la República en base al número de parlamentarios y Bancadas Políticas existentes en el Pleno del Congreso de la República.

Son quienes votan la *Acusación Constitucional* que finalmente se debate en el Pleno del Congreso de la República.

viii. La Decisión Del Pleno Del Congreso De La República Respecto De Una Acusación Constitucional.

Es el procedimiento, conforme al artículo 100° de la Constitución, que debate la Acusación Constitucional.

Este último punto es el que motiva la ejecución de la presente tesis, por cuanto el trámite parlamentario se puede detallar en deficiente en este punto que involucra:

- a) Una acción de naturaleza sancionatoria por parte del Congreso de la República.
- b) Una acción que involucra la evaluación de derechos fundamentales en una persona sometida a una Acusación Constitucional.
- c) Una situación próxima a un proceso judicial en el Poder Judicial y Ministerio Público por una dualidad de situaciones:
 - c.1) Una infracción constitucional, que no está debidamente “reglamentada”.
 - c.2) Un delito penal que es evaluado en una *instancia política*, y sobre la cual no existe una determinación objetiva del “delito” sobre la cual recae la acusación.

Elementos que resultan no estar detallados en la bibliografía nacional pero que se desprenden de la articulación entre la lectura de la Constitución y del propio Reglamento del Congreso de la República.

CAPÍTULO III.

CASOS PARTICULARES DE ANÁLISIS

El presente capítulo contiene el “elemento que da origen” a nuestro trabajo de investigación y permite identificar las tres condiciones que nos permite delimitar la “muestra” de nuestro estudio, en base al análisis del “universo de estudio”, conforme se puede detallar en el siguiente esquema:

Contexto respecto de la Tesis		
Sujeto sometido a Acusación Constitucional	Procedimiento parlamentario donde se desarrolla la Acusación Constitucional	Proceso Judicial con sentencia final (cosa juzgada)
Funcionario considerado Alta Autoridad	Desafuero parlamentario o retiro de la inmunidad parlamentaria	<p>Donde se han podido ubicar:</p> <p>a) Casos de sentencia condenatoria.</p> <p>b) Casos donde se han registrado la prescripción del delito y el sobreseimiento del caso</p>
Artículo 99° de la Constitución	Artículo 100° de la Constitución	Código Penal y Código Procesal Penal
Base legal		

Este elemento es esencial para la delimitación de nuestro trabajo de tesis, el cual permite desarrollar los siguientes puntos.

1. DE LA DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO.

A efectos de limitar las fronteras en las cuales se desarrolla nuestra investigación, sostenemos la importancia de evaluar en detalle cada elemento por cuanto nos permitirá sustentar el punto inmediato siguiente y con ello fundamentar la III Parte de la Tesis y el desarrollo de la validación de la hipótesis.

- a) Casos que hayan generado una Acusación Constitucional.

Punto referencial para identificar que no todos los hechos de vinculación y connotación penal tienen incidencia en el trámite parlamentario.

Esto igualmente permite determinar que no todas las situaciones de “infracción constitucional” provocan una controversia constitucional que luego se evalúa en el ámbito jurisdiccional.

- b) Casos que hayan provocado una acción punitiva del Congreso de la República.

La representación del *elemento punitivo* en el presente ámbito parte de la evaluación de la “naturaleza jurídica” de las medidas que adopta el Congreso de la República y ello nos permite sostener que son *medidas punitivas*, conforme la estructura de la “pena”, en forma genérica.

Así una “llamada de atención”, se configura como el elemento más inocuo de las sanciones impuestas en el ámbito parlamentario.

Sin embargo, medidas como “suspensión en el ejercicio de funciones” y “la inhabilitación política” o la “destitución en el cargo”, provocan como medidas secundarias el “retiro de la inmunidad” en los dos casos finales y ello provoca una evaluación de naturaleza pena en forma específica.

Por ello resulta importante detallar que los “casos representativos” que se analizarán en el presente capítulo nos permiten detallar aspectos que han provocado una segunda imposición de medidas punitivas pero esta vez por parte del Poder Judicial, tanto con una sentencia condenatoria, como por actos previos que se han evaluado en el trámite de un proceso judicial.

Eventualmente se presentan dos casos en los cuales no se configura una condena penal y sólo un caso permite evaluar una situación de prescripción del delito.

Inclusive se ha podido registrar el caso de Michael Urtecho, quien se acogió a la *terminación anticipada del proceso penal* seguido en su contra por *atentar contra la libertad laboral de sus trabajadores*, a quienes les cobraba su sueldo y los condicionaba a condiciones laborales injustas.

Así ha recibido sólo 15 de los 25 años que constaba la acusación fiscal inicial, al acreditarse que un *congresista paraplégico cometía delito contra sus propios trabajadores*, a quienes el Congreso remuneraba⁵¹.

La razón por la cual no se consigna este hecho es que no se ubica la *condena penal impuesta* en algún medio de información y es porque la familia ha planteado un Habeas Data contra medios de prensa para que se evite difundir esta noticia, a pesar de la naturaleza criminal de los actos del ex parlamentario.

c) Casos que se hayan judicializado.

Principalmente para evaluar el contexto “posterior” del “juicio político” conforme es detallado en la bibliografía que nos permite detallar el alcance del *procedimiento parlamentario de Acusación Constitucional*.

Por la necesidad de acreditar nuestra investigación es que nos hemos centrado en casos que se han judicializado y por ello los ejemplos o casos representativos en el punto inmediato siguiente.

⁵¹ PERÚ 21 (2013) *Michael Urtecho recibiría condena de 15 años*. Ubicado el 09/10/2013 de <https://peru21.pe/politica/michael-urtecho-recibiria-condena-15-anos-127804>

- d) Casos que incluyan una condición definitiva en el caso (sentencia definitiva, la cual se ha podido observar no siempre implica una sentencia condenatoria)
- Para dotar de rigor científico a nuestra investigación y acreditar en forma objetiva, que los casos evaluados son casos que permiten evaluar elementos que son públicos y objetivos.

2. DE LOS CASOS REFERENCIALES Y DEL DETALLE DE LA IMPORTANCIA DE ANALIZAR CASOS JUDICIALIZADOS CON SENTENCIA FINAL.

Sobre la base de las condiciones detalladas en el punto anterior, se señalan los siguientes casos:

a) El Caso Torres Ccalla (Violación Sexual)

Posterior al procedimiento de Acusación Constitucional contra Leoncio Torres Calla, por parte de la Comisión Permanente, el Congreso de la República aprobó *desaforar* al parlamentario y fue sometido a proceso penal por delito contra la libertad sexual de menor de edad, a quien previamente había intentado violar.

La condición agravante del caso es que la menor de edad (16 años) era “asesora parlamentaria”, y dicha situación no fue observada por el propio Congreso de la República, y se limitó la acusación constitucional a la denuncia penal.

El Poder Judicial finalmente condenó al mencionado parlamentario a condena efectiva⁵².

b) El Caso Gustavo Espinoza (Traición A La Patria)

Es el caso de una *Acusación Constitucional por infracción de la Constitucional*, no registrándose situación delictiva alguna pero sí un acto indebido que comprometía las “relaciones internacionales” con la República de Chile, luego de difundir un video del entonces General Donayre, haciendo mofa de los soldados de dicho país.

⁵² PODER JUDICIAL (2005) *Levantamiento de inmunidad parlamentaria*. Ubicado el 20/07/2018 de: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/noticia_imprimir.asp?codigo=1685

Como consecuencia de este acto se procedió a sancionar el desafuero del mencionado parlamentario y no se le impuso medida punitiva adicional⁵³.

c) El Caso Tula Benites, Karina Beteta Y Elsa Canchaya (Contrataciones De Personal Fantasma)

Son casos en los cuales se ejecutaron *contrataciones fantasmas*, provocando un perjuicio económico al Congreso de la República por disposición de remuneraciones a personal del primer poder del Estado.

En los tres casos, los resultados fueron distintos.

c.1) En el caso de Karina Beteta, en el Congreso legislatura 2011-2016, se procedió a archivar la denuncia no generándose ninguna acusación constitucional a pesar de registrarse el delito.

c.2) En el caso de Elsa Canchaya, se procedió a la Acusación Constitucional⁵⁴, se ejecutó el desafuero pero la condena penal fue apelada en forma reiterada y se provocó la *prescripción del delito*⁵⁵, situación que permitió la posibilidad de que la mencionada parlamentaria denunciara al Congreso de la República por el desafuero al generarse un perjuicio.

Corresponde señalar que actualmente sigue desempeñando la función de Notaria Pública, luego que fuese desaforada y se le impusiese una condena penal que luego fue revertida⁵⁶.

c.3) Caso Tula Benites.

Se acreditó la contratación de *personal fantasma* y se procedió a la Acusación Constitucional⁵⁷, y se siguió un proceso penal en la Corte Suprema

53 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2012) *Pleno vota Acusación Constitucional contra Congresista Gustavo Espinoza*. Ubicado el 10/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/04NoticiasArchivoHistorico/3e981f5f219ea2c40525767a00047c88/?OpenDocument>.

54 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Pleno aprobó Acusación Constitucional contra Elsa Canchaya*. Ubicado el 10/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/792BFF06106862F3052572F4000E79BC/?OpenDocument>.

55 LA REPÚBLICA (2013) *Tribunal Constitucional anuló condena a Elsa Canchaya*. Ubicado el 01/10/2013 de <https://larepublica.pe/politica/742234-por-prescripcion-tribunal-constitucional-anulo-la-condena-a-elsa-canchaya>.

56 IDEHPUCP (2013) *Sentencia del TC en caso Elsa Canchaya*. Ubicado el 20/07/2018 de <http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2012/07/boletin-31-comentario-canchaya.pdf>

57 CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Aprueban Acusación Constitucional contra Tula Benites*. Ubicado el 21/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/9388CD6A5C7125DB052573EC00678EFA/?OpenDocument>.

de Justicia de la República, pero el Poder Judicial demoró en el trámite del proceso y este finalmente prescribió.

d) El Caso Alejandro Yovera (El Caso Come Pollo)

Es el caso más representativo de todos, por cuanto en forma casi inmediata a la Acusación Constitucional, el Poder Judicial impuso condena efectiva al Parlamentario que había hecho fraude con las *boletas de compras de alimentos* que en su momento eran “gastos operativos” sufragados por el Congreso de la República⁵⁸.

Lo paradójico de la Acusación Constitucional es que a pesar del delito flagrante, sólo se procedió a acusar por “infracción constitucional”.

⁵⁸ CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a Alejandro Yovera.* Ubicado el 11/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/04NoticiasArchivoHistorico/5fb97ebb3771c1210525814c00731f01/?OpenDocument>.

CAPÍTULO IV.

EL DISEÑO DE UN PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO EN EL FUERO PARLAMENTARIO, A MODO DE DESARROLLO DE LA HIPÓTESIS DE LA TESIS

En el desarrollo de la presente tesis, el capítulo final que a continuación se desarrolla pretende exponer dos puntos específicos: nuestra posición sobre el tema en evaluación y nuestro aporte, para así poder solucionar el “problema” de la investigación, el cual se focaliza en la atención a la necesidad de reglamentar la articulación constitucional derivada de la interpretación y aplicación de los artículos 99° y 100° de la Constitución Política, en una norma específica, la cual puede ser un *procedimiento parlamentario*, conforme una *Resolución Legislativa*, que pueda ponderar la necesidad de cumplir con el *principio de legalidad* y pueda determinar el *debido proceso y la tutela de derechos de carácter fundamental en el ámbito parlamentario*, cuando sea requerido.

Consideramos en este punto específico, que la “hipótesis” no puede ser expuesta en forma sintética y para ello desarrollamos nuestra posición expuesta en el proyecto de tesis, la cual indicaba:

“consideramos que sí es posible regular un **procedimiento político parlamentario en el cual se diseñe un Proceso de Acusaciones Constitucionales** dirigido a la investigación, procesamiento e imposición de una sanción en el Fuero Parlamentario, el cual puede ser aprobado tanto como una norma adicional al Reglamento del Congreso de la República o como Ley especial, para así poder generar un **único procedimiento** que genere seguridad jurídica, respete los derechos fundamentales de los acusados y se determine una sanción conforme a ley.

El desarrollo de esa *respuesta temporal preliminar y parcial* expuesta en el Proyecto de Tesis, en la presente Tesis, la ampliamos en forma de los siguientes fundamentos:

1. PLANTEAMIENTO DE UNA POSICIÓN ACADÉMICA SOBRE UN “PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO” EN EL ÁMBITO DEL DERECHO PARLAMENTARIO.

Tomando en consideración que al respecto hemos ubicado la siguiente información teórica:

- a) Abraham García Chávarri (2008) *Acusación constitucional y debido proceso*. Lima, Jurista⁵⁹.
- b) Domingo García Belaúnde (2005) ¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político? En: VIII Congreso de derecho constitucional. Lima, APDC⁶⁰.
- c) César Delgado Guembes (2009) *La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional*. Lima, PUCP⁶¹.
- d) César Landa Arroyo (2005) Antejuicio Político. En: *Elecciones*, Año 4, N° 5, octubre 2005⁶².
- e) Carlos Ramos Núñez (2009) Historia de la Corte Suprema de Justicia. Lima, Poder Judicial⁶³.
- f) Jorge Andujar (1994) Francisco García Calderón y José de la Riva Agüero. En: Boletín IRA, N° 21, 1994⁶⁴.
- g) Marco Falconi Picardo (2015) *El proceso de acusación constitucional en el Perú*. Lima, Congreso de la República⁶⁵.

⁵⁹ García Chávarri, Abraham (2008) *Acusación constitucional y debido proceso*. Lima, Jurista.

⁶⁰ García Belaúnde, Domingo (2005) ¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político? En: VIII Congreso de derecho constitucional. Lima, APDC.

⁶¹ Delgado Guembes, César (2009) *La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional*. Lima, PUCP.

⁶² Landa Arroyo, César (2005) Antejuicio Político. En: *Elecciones*, Año 4, N° 5, octubre 2005

⁶³ Ramos Núñez, Carlos (2009) Historia de la Corte Suprema de Justicia. Lima, Poder Judicial.

⁶⁴ Andujar, Jorge (1994) Francisco García Calderón y José de la Riva Agüero. En: Boletín IRA, N° 21, 1994

⁶⁵ Falconi Picardo, Marco (2015) *El proceso de acusación constitucional en el Perú*. Lima, Congreso de la República.

- h) Arturo Giles Ferrer (1986) *La acusación constitucional*. Tesis para optar el grado de Bachiller por la PUCP⁶⁶.

Dicho texto no ha sido empleado en la presente tesis por cuanto detalla un “contexto constitucional” diferente, toda vez que sólo se analiza el proceso reglado por la Constitución de 1979 y que a la fecha resulta desfazado.

Sin embargo, el contexto teórico constitucional ha sido empleado en la presente tesis.

Podemos señalar que en ningún texto o referencia hemos podido ubicar alguna mención al “procedimiento parlamentario” en el cual se ejecuta el *procedimiento de acusación constitucional* que se desarrolla ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales que forma parte de la Comisión de Constitución y que eventualmente se tramita o ante el Pleno del Congreso de la República o ante la Comisión Permanente del Congreso de la República.

Esta explicación, parte de la comprensión de los siguientes puntos:

- a) El trámite parlamentario, no es detallado en ningún libro sobre el particular y para ello podemos citar al profesor César Delgado Guembes, quien es profesor de “Derecho Parlamentario” en la PUCP y quien fue Oficial Mayor en el Congreso de la República.

Citamos esta situación porque fue una pregunta expresa y directa al mencionado profesional para poder saber la realidad de este punto específico.

La respuesta objetiva ante esta interrogante se debe a que los *congresistas de la República* no son proclives a reglamentar sus actividades, por cuanto esto podría considerarse un “límite natural” a sus competencias.

Un punto en consideración que consideramos atenta contra la objetividad de toda “práctica administrativa y ejecutiva en el Estado”, por cuanto las

⁶⁶ Giles Ferrer, Arturo (1986) *La acusación constitucional*. Tesis para optar el grado de Bachiller por la PUCP.

acciones del *Ente Estatal*, en este caso el propio Congreso de la República, debe regular sus propios actos internos y externos, en base a la aplicabilidad del principio de legalidad.

Por tanto, la referencia al profesor Delgado Guembes nos permite detallar que su opinión y posición es fundamental en la presente tesis y no existe en el país, autoridad académica o profesional con mayores referencias objetivas y académicas que nuestra fuente.

b) El profesor César Landa Arroyo, ex Presidente del Tribunal Constitucional en varias de sus publicaciones detalla la necesidad de *reglamentar* los procedimientos parlamentarios, sin embargo, por la especialidad y por la elevada consideración político-constitucional, *no detalla* “*qué procedimientos parlamentarios*” deben regularse en forma prioritaria.

c) El profesor Carlos Ramos Núñez, actual magistrado del Tribunal Constitucional, en sus obras no detalla la importancia de la *reglamentación de los procedimientos parlamentarios*, específicamente porque nos expone la importancia de la *posición política e ideológica* del Congreso de la República en sus actos.

Este punto, nos permite proyectar el contexto político sobre el cual se desarrolla la “toma de decisiones” sobre todos los actos parlamentarios y detalla la volatilidad parlamentaria al momento de evaluar una “acusación constitucional”.

c) El profesor Jorge Andujar, principalmente en sus investigaciones, detalla que la “ideología política” peruana, a lo largo de la historia constitucional nacional, siempre ha estado “fluyendo” entre una posición conservadora a una liberal y de una posición de *amplitud democrática* a una posición donde las libertades políticas han sido limitadas (golpes de Estado, dictadura militar y dictadura civil), razón por la cual *no es posible identificar en el tiempo un procedimiento parlamentario que haya sido desarrollado* para atender una

regulación constitucional “abierta”, conforme se detalla en los artículos 99° y 100° de la Constitución política de 1993.

- d) Inclusive en el texto “el proceso de acusación constitucional” de Marco Falconí, no se detalla la importancia del “procedimiento parlamentario”, ni tampoco se especifica su “trámite”.

Un vacío teórico que resulta vinculante con nuestra motivación, toda vez que el autor Falconi Picardo ha evaluado el texto desde una perspectiva constitucional y no desde el punto de vista del “procedimiento parlamentario”.

Ante este panorama representativo, consideramos que *nuestra posición* sobre la necesidad de articular un *procedimiento parlamentario*, no sólo resulta necesario sino que además se justifica en un contexto en el cual el *debido proceso* se constituye como un pilar democrático en un país donde rige el Estado de Derecho.

Adicionalmente, nuestra posición es sustentada en la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando en el presente año ha conminado al Congreso de la República a respetar el *debido proceso* en el trámite seguido contra algunos magistrados del Tribunal Constitucional que optaron por evaluar el caso de “El Frontón”, tomando en cuenta la condición de “cosa juzgada” frente al caso de evaluación de un “delito de lesa humanidad”, conforme es detallada en toda la prensa nacional⁶⁷.

Nótese que este procedimiento, está inmerso en un caso tratado por la misma CIDH: Caso Durand y Ugarte vs. Perú y que le ha permitido a la Jurisdicción Supra Nacional tomar una posición frente al procedimiento de acusación constitucional seguido contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, por lo cual la

⁶⁷ EL COMERCIO (2017) *CIDH pide archivar acusación contra magistrados del TC*. Ubicado el 17/11/2017 Recuperado de: <https://elcomercio.pe/politica/corte-idh-pide-archivar-acusacion-magistrados-tc-noticia-496057>.

referencia y mención a este caso se vuelven importantes para el caso de la acreditación de nuestra posición⁶⁸.

2. PLANTEANDO EL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL, CONFORME LOS ARTÍCULOS 99 Y 100 DE LA CONSTITUCIÓN.

Al registrar el hecho objetivo y específico de que la bibliografía nacional no detalla un “procedimiento parlamentario” para el desarrollo de la acusación constitucional, desarrollamos un procedimiento parlamentario de acusación.

Corresponde detallar que esta “propuesta” será sintetizada en la parte de las “Recomendaciones”, en la parte final de la Tesis.

⁶⁸ CIDH (2018) *Resolución de la CIDH, de 8/02/2018, Medidas Provisionales respecto del Perú, Caso Durand y Ugarte vs. Perú.* Ubicado el 02/06/2018 Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pd.

PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL.

A. ESTRUCTURA NORMATIVA.

ELEMENTOS PROCEDIMENTALES REFERENCIALES

Referencia	Resultado
Tipo De Norma (ubicación en el Sistema Normativo Nacional)	Resolución Legislativa
Alcance de la norma	Sólo válida para trámites en el Congreso de la República
Mecanismo de publicación	Publicación en el Diario Oficial El Peruano
Fecha de vigencia a la aprobación	Al día siguiente de la publicación
Base Legal	a) Constitución Política del Perú b) Reglamento del Congreso de la República
Mecanismo de aprobación	Aprobación por el Pleno del Congreso de la República a) Votación simple. b) Votación convocada con quorum mínimo c) Puede ser dispensado de Debate en Peno. d) Puede ser aprobado por Acuerdo de Junta de Portavoces.

B. PARTE PROCEDIMENTAL

PARTE I.

Etapas De la denuncia.

Proponente	Base Constitucional	Objetivo
Denuncia constitucional formulada por Fiscal de la Nación, Congresistas de la República o ciudadano legitimado	Artículo 159 Artículo 99	Desarrollar la identificación de la “denuncia”, respecto de la “infracción constitucional”.

PARTE II.

Del análisis de la denuncia.

Denuncia Formulada por:	Oficialia Mayor	Trámite derivado a
Congresistas de la República	Admisión de la denuncia	Derivo a Comisión de Constitución
Fiscal de la Nación	Traslado a la Comisión de Constitución	Derivo a SubComisión de Acusaciones Constitucionales
Ciudadano en general	Evaluación en la Oficialia Mayor	Derivo a Comisión de Constitución

El planteamiento de nuestra posición parte de estos elementos:

- a) Cuando el Fiscal de la Nación “denuncia”, la acusación está basada en elementos de naturaleza penal, por tanto, la “evaluación” debe ser analizada directamente por la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.

En estos casos, conforme al artículo 99° de la Constitución, la “denuncia” igualmente será evaluada en la Comisión Permanente, porque no existe reglamentación sobre el particular.

Este elemento es importante en el análisis de la tesis por cuanto permite identificar y diferenciar el “proceso judicial” del “juicio político”.

- b) Cuando quien denuncia es un Congresista de la República o un “ciudadano”, la denuncia es tramitada por la Oficialía Mayor, quien en un caso “admite sin evaluación” y en otro caso “evalúa” la denuncia para que en ambas situaciones, el trámite vaya a la Comisión de Constitución quien derivará la denuncia a la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

PARTE III.

Análisis en Comisiones y derivo a Comisión Permanente.

Comisión de Constitución	Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales	Comisión Permanente
Admite a trámite la denuncia y la deriva a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales	Aprueba la “denuncia” y redacta el Dictamen que contiene la “acusación”, que es desarrollada por la Comisión Permanente	Formula la Acusación Constitucional ante el Pleno del Congreso
		Artículo 99° de la Constitución

PARTE IV.

De las medidas punitivas del Congreso de la República.

En base al criterio de proporcionalidad se desarrolla el ámbito punitivo de las acciones que puede desarrollar el Congreso de la República.

Procedimiento parlamentario	Procedimiento parlamentario	Procedimiento parlamentario y acción penal	Procedimeinto parlamentario y acción penal	Acción administrativa
Llamada de atención	Suspensión de funciones Artículo 99	Destitución	Inhabilitación	Desafuero o retiro de inmunidad

Estas acciones en forma específica permitirán detallar el *procedimiento parlamentario*, garantizando la aplicación del criterio de debido proceso y demás principios constitucionales aplicables a todo *procedimiento de naturaleza administrativa*, que en el presente caso está relacionado al *procedimiento parlamentario*.

TERCERA PARTE

1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Para la ejecución de la presente “parte” en la ejecución de la tesis, analizaremos algunos aspectos puntuales que nos han permitido evaluar el resultado de los “elementos referenciales” aplicables a nuestro trabajo de investigación.

En tal sentido, analizaremos *tres elementos* referenciales que nos han guiado a la construcción de nuestra hipótesis.

- a) La opinión pública de los “abogados” (en general), sobre la “inmunidad parlamentaria”.

La encuesta tiene las siguientes características:

- a.1) Dirigida a “abogados”, sin especificar especialidad o nivel académico (bachiller, maestrante, maestro en Derecho, doctorando o Doctor en Derecho)
- a.2) Se ha desarrollado en forma anónima.
- a.3) La encuesta ha sido desarrollada en forma pública, por cuanto se ejecutó con la entrega de una hoja contenido las preguntas que se han sistematizado en forma estatica, mientras se ejecutaba las labores profesionales en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Piura y el Ministerio Público en Piura.
- a.4) El objetivo de la encuesta: se buscaba conocer el “nivel de referencia” del “tema d estudio en la tesis” en la “población”, para así poder justificar y resaltar la importancia de la Tesis.
- a.5) El período de ejecución de la encuesta: entre marzo 2018 a junio 2018, específicamente entre los meses en que se descubrió los problemas de corrupción que motivaron la petición de vacancia y “renuncia” al cargo de la Presidencia de la República por parte de Pedro Pablo Kuczynski.

Esta referencia “temporal” es sumamente importante porque nuestro trabajo de investigación, tiene estas particularidades:

- El proyecto de Tesis ha sido aprobado con un tiempo muy anterior a este “hecho puntual”: Renuncia del Presidente de la República, justamente para evitar una segunda Acusación Constitucional.
- El proyecto de Tesis ha sido aprobado en un momento muy anterior a los hechos que provocaron la imagen social negativa del sistema judicial a raíz de los CNM-Audios.
- El proyecto de Tesis ha sido aprobado tomando en cuenta sólo “casos particulares” que respecto de la fecha de finalización de la presente tesis, nos permite identificar nuestro “universo y muestra” de estudio y por ello sólo se analizan casos que han finalizado con una *sentencia final*, la cual inclusive no siempre ha sido una *sentencia condenatoria*, por que los “plazos procesales” han operado a favor de congresistas con evidentes actos delictivos. Este punto es referencial y es porque de este modo los mismos Congresistas de la República evitan un procedimiento parlamentario que al final pueda ser negativo para sus propias carreras políticas.

La encuesta nos permite evaluar los siguientes resultados.

Pregunta	Encuesta N° Consultados	Si %	No %
¿Sabe que implica el término “inmunidad parlamentaria”?	50	50	00
¿Conoce de algún caso de político/funcionario que haya utilizado la “inmunidad parlamentaria”?		50	00
¿Podría indicar alguna referencia sobre la pregunta anterior?		50 (mencionan datos en la encuesta)	00
¿Sabe si alguno de los mencionados ha sido “desaforado” o ha “perdido” la inmunidad parlamentaria”?		30	20
¿Conoce de algún caso de la pregunta 3 que haya sido “condenado en el Poder Judicial”?		40	10
Puede dar algún caso de la pregunta anterior		No aplica	No precisan los datos referenciales
Conoce el procedimiento parlamenatrio		00	50
Conoce el procedimiento parlamentario de acusación constitucional		00	50

- b) La opinión de abogados especializados en Derecho Constitucional, sobre las “prerrogativas constitucionales” y los “aspectos procesales, procedimentales, penales y constitucionales aplicables a la investigación”.

Las estadísticas de este grupo se desprenden del “cuadro” expuesto en el punto anterior y nos permiten señalar la “identidad” del contexto que presentan los “abogados especializados en Derecho Constitucional” con respecto de los “abogados, sin especialidad” sobre el tema en evaluación en la presente tesis.

Este punto, nos permite detallar que las “referencias coloquiales” o que provienen de los medios de prensa, son asimiladas como “información objetiva y vinculante” sin tomar en cuenta que sólo los casos analizados en la presente tesis son las únicas que cumplen con las condiciones de una relación:

- b.1) Personas a las cuales se les aplica los artículos 99 y 100 de la constitución.
- b.2) Personas sobre las cuales ha procedido una “acusación constitucional” y sobre las cuales se ha retirado la “inmunidad parlamentaria”, incluyendo un “desafuero parlamentario”.
- b.3) Personas que han sido evaluadas en un proceso judicial respecto de la imputación de un “delito”.
- b.4) Personas que han sido condenadas en el Poder Judicial por la comisión de un delito.

Por tanto, esto nos permite detallar que la *población* (en forma general) no conoce de estos elementos referenciales y existe una acreditada desinformación sobre una de las facultades más importantes del Congreso de la República: aplicar un nivel de sanción que eventualmente puede provocar una sanción penal en el ámbito jurisdiccional, cuando el Ministerio Público y el Poder Judicial acreditan los hechos por los que fueron “acusados constitucionalmente” y se acredita la *responsabilidad penal* del Alto Funcionario o Alta Autoridad en el Estado Peruano, conforme se detalla en el artículo 99 y 100 de la Constitución Política.

- c) La opinión de expertos consultados en la materia.

En la ejecución de las entrevistas a especialistas vinculados al área de trabajo académico de la Tesis, hemos podido formular una serie de preguntas, las cuales fueron formuladas o vía correo electrónico o a la salida de alguna actividad académica en la ciudad de Lima, Chiclayo, Trujillo o Piura

Este punto se hace mención porque las entrevistas han sido muy puntuales, en razón del tiempo disponible y eventualmente en una comunicación por correo electrónico se nos ha brindado mayor información.

Sobre el detalle del siguiente cuadro podremos detallar:

Especialista y referencia profesional	Pregunta del tesista	Resumen de la posición del entrevistado
Edgar Carpio Marcos Ex Viceministro de Justicia	El Tribunal Constitucional ha solicitado la <i>reglamentación del procedimiento de acusación constiucional al Congreso de la República</i>	Si lo ha requerido, pero el Congreso de la República no ha cumplido dicha recomendación, principalmente porque existe poca vocación del Congreso a cumplir requerimientos de otras entidades que conforman el Estado.
Luis Sáenz Dávalos Profesor de la PUCP	El Tribunal Constitucional podría exigir que el Congreso de la República regule en forma expresa el procedimiento de las acusaciones	No, porque las facultades del Tribunal Constitucional no están desarrolladas para este ámbito; eventualmente las recomendaciones que

	constitucionales	sugiere el TC pueden “convencer” al Congreso de la necesidad de regular este mecanismo pero el principio de autonomía de ambas entidades limita dicha acción.
Ernesto Blume Fortini Presidente del Tribunal Constitucional	El Tribunal Constitucional considera que el Reglamento del Congreso de la República es suficiente para evaluar los casos de acusaciones constitucionales	El mencionado entrevistado, ante el Congreso Nacional de Derecho Constitucional (Lima, Universidad San Ignacio de Loyola, Agosto 2017), señaló que al existir “procesos en trámite”, no puede formular una opinión porque ello sería perjudicial para el trámite del mismo. Dicha respuesta, sin embargo, la amplió señalando que los “procedimientos parlamentarios” del Congreso de la República son muy deficientes y escasos.
Carlos Ramos Núñez Magistrado del Tribunal Constitucional	¿Existe alguna referencia puntual sobre casos o referencias sobre trámites	El profesor señaló que aún en la Guerra del Pacífico, en el Oncenio de Augusto

	de acusaciones constitucionales superiores a la realidad actual?	B. Leguía y en la misma época de corrupción de Alan García (I Gobierno) no se ha registrado nunca tantas acusaciones constitucionales por corrupción como en la actualidad, todo después del gobierno de Alberto Fujimori
César Delgado Guembes Asesor Parlamentario Ex Oficial Mayor del Congreso de la República	¿Por qué no existe un procedimiento reglado para ejecutar acusaciones constitucionales?	Porque la autonomía del Congreso de la República permite tal situación, tomando en cuenta que no se ejecuta un proceso penal “en forma estricta”.
Gustavo Gutierrez Ticse Asesor Parlamentario	¿Por qué no existe un procedimiento reglado para ejecutar acusaciones constitucionales?	Porque, los procedimientos parlamentarios no siempre provocan una connotación penal, pudiendo ejecutarse estos procedimientos tras una acción “política”.
Leny Palma Encalada Jefa de la Oficina de Democracia del Congreso de la República	¿Por qué no existe un procedimiento reglado para ejecutar acusaciones constitucionales?	Porque el Congreso de la República puede modificar su reglamentación en función a las condiciones temporales, tanto en lo político como en lo constitucional

Sobre la base de este “resumen” de preguntas-respuestas a especialistas en materia constitucional y parlamentaria, podemos detallar, conforme se ha podido evaluar con la *asesoría de la Tesis*, que los mencionados especialistas han omitido responder en forma expresa a las siguientes preguntas:

- a) ¿Por qué no es posible regular un procedimiento que desarrolle los artículos 99 y 100 de la Constitución Política?
- b) El congreso de la República, ¿Porqué no desarrolla un reglamento que permita desarrollar procedimientos parlamentarios que puedan vincular al ámbito sancionatorio o disciplinario?
- c) ¿Cuál es la razón principal para que cada Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales ***desarrolle un procedimiento específico y excluyente*** cada vez que hay un trámite donde se desarrolla una “Acusación Constitucional”?

La respuesta a cada una de estas interrogantes se debe al hecho particular de que el Congreso al ejecutar un procedimiento parlamentario en la materia de evaluación de la presente tesis, se ajustaría a un procedimiento previsible y que limitaría el contexto de ***discrecionalidad política*** que eventualmente podría permitir el “manejo político” de un asunto controversial.

En este sentido, esta “respuesta” devenida de los silencios a las preguntas formuladas, nos permite plantear una posición que valida y legitima nuestra posición, dado que es una estructura académica que permite el control político y constitucional sobre un procedimiento parlamentario que no existe en la actualidad.

Estos tres grandes elementos evaluativos nos han permitido materializar una posición autónoma, objetiva y sobre todo vinculada a una fundamentación que

lamentablemente no ha sido registrada en la *práctica procedimental parlamentaria*, muy a pesar de las situaciones que ameritaban su configuración y regulación.

2. PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO

Sostenemos la posición de que el actual “sistema” de desarrollo de la Acusación Constitucional no ha sido desarrollada por el Congreso de la República, y es por ello que no se logra ubicar en:

- a) El portal web del Congreso de la República, la determinación del “procedimiento” referencial.
 - i. Búsquedas en el mismo portal “general” del Congreso de la República.
 - ii. Búsquedas en el portal de “nosotros”.
 - iii. Búsquedas en el portal de “práctica parlamentaria”.
 - iv. Búsquedas en el portal de “Trabajo de Comisiones”.
 - v. Búsquedas en el portal de “trabajo de la Mesa Directiva”.
 - vi. Búsqueda en el portal de trabajo de la Comisión de Constitución.
 - vii. Búsqueda en el portal de trabajo de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales.
- b) En las direcciones de los portales web de las Comisiones de Constitución, Justicia o de Investigación (según fuere el caso) no se ubica ningún procedimiento establecido de modo preliminar a toda acción de “acusación constitucional”.

- c) En el ámbito bibliográfico, ningún investigador peruano ha detallado *cómo debe ser el procedimiento parlamentario en el cual se desarrolla la Acusación Constitucional* principalmente porque este procedimiento por práctica parlamentaria es desarrollada en función al contexto o coyuntura.

Ante esta situación, conforme se ha podido acreditar en la II Parte de la investigación de Tesis, es que se plantea el análisis del *modelo procedimental* que planteamos para así atender el silencio legislativo existente sobre el particular.

Consideramos que en este ámbito, se han empleado las referencias teóricas de:

Área	Elemento referencial	Criterio de evaluación	Item evaluado
Derecho Constitucional	Estructura de la Administración Pública	Determinación de privilegios y prerrogativas en los funcionarios públicos	Organización política del Estado
	La dirección política del Estado	Identificación de las altas autoridades en el Estado	Prerrogativas constitucionales
Teoría de Estado	División de las funciones del Estado	Facultades de cada órgano estatal	La facultad jurisdiccional del Congreso de la República
	Contrapesos político constitucional	La facultad fiscalizadora y jurisdiccional del Congreso de la República	El desafuero parlamentario y la acusación constitucional
Derecho Penal	Delito y presunción de inocencia	Principios de orden punitivo en el control social	El control social La evaluación de la responsabilidad

			penal
	La acusación penal (hecho ilícito y legislación penal)	El iter criminis penal	La determinación de la responsabilidad penal
Derecho Procesal	Los procesos especiales	Proceso jurisdiccional y de fiscalización en sede política: Congreso de la República	La facultad punitiva del Congreso
	Medios probatorios	Evaluación de la prueba	Análisis de la prueba en el procedimiento parlamentario y proceso penal
Derecho Procesal Penal	La acusación constitucional	El seguimiento del proceso de acusación constitucional por comisión de falta/delito/infracción constitucional por alta autoridad por parte del Congreso de la República	La condena penal La sentencia con calidad de cosa juzgada, sin condena penal

El resultado de la evaluación temática individual, en conjunto y en forma sistemática nos ha permitido desarrollar el capítulo en el cual sostenemos nuestra hipótesis.

CUARTA PARTE

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

1. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS.

En la evaluación del “problema” de la investigación, debemos detallar que se deben evaluar las siguientes normas, en forma conjunta y complementaria:

- a) La Convención Americana.
- b) La Constitución Política de 1993.
- c) El Reglamento del Congreso de la República.
- d) El Código Penal.
- e) El Código Procesal Penal.

Sobre la base de la complementación de estos elementos, podemos observar el siguiente cuadro analítico:

	Derechos Fundamentales	Derechos de naturaleza política	Respecto del procedimiento no-penal	Respecto del proceso penal
Convención Americana	Aplica	Aplica	No hay referencia	Aplica
Constitución			Refiere al Reglamento del Congreso (Nombra con artículo en blanco)	
Reglamento del Congreso			No desarrolla (silencio legislativo)	
Código Penal		No trata el procedimiento	No aplica	

		parlamentario		
Código Procesal Penal.		No trata el procedimiento parlamentario	No aplica	

Tomando en cuenta, este contexto teórico, la hipótesis formulada en el último capítulo de la tesis, desarrolla:

- a) Una posición teórica, desarrollada sobre la base del análisis casuístico identificado en la evaluación “universo-muestra” de estudio.
- b) Una determinación de planteamiento de desarrollo teórico en el ámbito constitucional y procesal penal aplicable al seguimiento judicial en acusaciones constitucionales contra Altas Autoridades.
- c) La presentación de un “proyecto de desarrollo de un trámite parlamentario”, que en esencia cubre el *silencio legislativo* existente en la materia.

Consideramos que sobre la base de la complementación de estos tres elementos, validamos nuestra hipótesis en el ámbito metodológico.

2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Sobre la base del registro y análisis estadístico de las Acciones de Desafuero, Inhabilitación e imposición de sanciones parlamentarias producto de una Acusación Constitucional, detallamos como **universo de estudio**, el panorama político-constitucional y penal aplicable a nuestra investigación.

Como **muestra de estudio**, evaluaremos los casos que cuenta con el siguiente perfil:

- a) Casos que hayan generado una Acusación Constitucional.

- b) Casos que hayan provocado una acción punitiva del Congreso de la República.
- c) Casos que se hayan judicializado.
- d) Casos que incluyan una condición definitiva en el caso (sentencia definitiva, la cual se ha podido observar no siempre implica una sentencia condenatoria)

Esta precisión nos permite detallar nuestro *tema de estudio en la tesis de forma puntual*, principalmente porque para la determinación de una *posición final, que sea académicamente objetiva* sólo podemos evaluar las situaciones finales que derivan de una acusación constitucional en sede parlamentaria, esto es en la vía judicial.

3. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES E INDICADORES UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN

En el proceso de investigación que proponemos ejecutar, analizaremos las siguientes variables y sus indicadores, para así generar la demostración de las variables en nuestra hipótesis en la propia Tesis.

a) Variables Independientes

- El contexto político social que existe en nuestro país, en un período de tiempo entre 1990 y el 2018, con lo cual podemos poner de límite temporal lo que ha pasado durante la promulgación de la Constitución de 1993 y la difusión de los CNM-Audios, que nos permiten graficar un contexto sobre el cual identificamos un *tema puntual de tesis*.
- La corrupción social y política que registra la participación delictiva de muchos funcionarios que ocupan Altos Cargos en el Estado.
- El análisis de la doctrina especializada en temas parlamentarios, procesales constitucionales, penales, procesal penal y constitucional, todo en función a una interpretación de cómo ha actuado el Congreso de la República ante casos de comisión de delitos de una Autoridad de alto rango.

- La legislación aplicable a la materia: el análisis propio de la Constitución en sus artículos 99 y 100 y los artículos vinculados a la inmunidad política.
- El análisis jurisprudencial de casos vinculados al contexto político y de corrupción, en donde se ha evaluado el debido proceso, la tutela judicial efectiva y principios de orden procesal y constitucional.

b) Variables Dependientes

- Nuestro período de investigación será determinado en función a casos especiales ocurridos entre los años 2011 y 2016, que es de donde se desprende la relación: “procedimiento parlamentario” y “proceso judicial con sentencia definitiva”.
- Por la implicancia de nuestro tema, analizaremos nuestra realidad nacional como delimitación geográfica.
- Nuestro objeto de estudio será el procedimiento parlamentario de acusaciones constitucionales para así formular su reforma.

EL PROCEDIMIENTO DE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A ALTAS AUTORIDADES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA				
Tema: el procedimiento parlamentario para desarrollar los artículos 99° y 100° de la Constitución				
Variable Independiente	Desarrollo de la variable	Indicadores	Método de evaluación	Método de sistematización de información.
	El contexto de corrupción de funcionarios	Casos provocados por Congresistas de	Referencia de los medios de prensa	Identificación de casos desarrollados hasta el registro de

	descritos en los alcances de los artículos 99 y 100 de la Constitución	la República		una sentencia final
		Casos provocados por parte de altas autoridades	Registro bibliográfico	Libros y revistas
			Entrevistas	Consultas a especialistas
			Encuestas	Encuestados y registro de información
Variable Dependiente	Casos registrados en el período legislativo 2011 al 2016	Sentencias de la Corte Suprema sobre casos devenidos de procedimientos parlamentarios de acusación constitucional	Sentencia del PJ	Lectura y análisis de la sentencia

4. LOCALIDAD E INSTITUCION DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

Se analizarán casos desarrollados en la complementación de un “procedimiento parlamentario de acusación constitucional” con “casos judicializados con registro de sentencia final consentida”, lo cual nos permite identificar un único período temporal de investigación (2011 al 2016) y nos permite detallar que sólo se analizarán casos objetivos de conocimiento público, que nos permite identificar como “institución” a ser evaluada al Congreso de la República que deriva un procedimiento de acusación constitucional al Poder Judicial.

Sobre esta base se detalla que la *realidad nacional* es el elemento que relaciona la localidad de nuestra investigación.

5. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Al respecto se ha ejecutado la evaluación de:

- a) Libros sobre la especialidad tratada.

- b) Revistas y artículos jurídicos desarrollados en base a la línea de la investigación de la tesis.
- c) Información de medios de prensa, para explicar el contexto temático propuesto.

En este ámbito se ha ejecutado como “técnica de investigación”.

- a) La lectura de la información referencial.
- b) La sistematización de la bibliografía en *fichas*.
- c) El registro de anotaciones sobre el tema evaluado.

Los instrumentos utilizados han sido:

- a) El registro de información en sistema digital: archivos de computadora.
- b) El registro de información de entrevistas y ejecución de encuesta: en cuadros de análisis.

6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA METODOLOGÍA EMPLEADA

Se ha ejecutado, el análisis de la siguiente descripción:

- a) En el diseño del tipo de investigación.
 - i. Investigación cualitativa, en base a los objetivos a tratar.
 - ii. Investigación multidisciplinaria, sobre la base de la necesidad de articular elementos teóricos descritos en la “ubicación” de la Tesis.
 - iii. Investigación básica, por cuanto el tema permite un desarrollo preliminar de lo evaluado.
 - iv. Investigación empírica, sobre la base del estudio y análisis de documentos aplicables a la investigación.

- b) En el ámbito de la metodología empleada.
- Método inductivo, para analizar el contexto de la “posición” del Congreso de la República y así analizar la impredecibilidad de una posición sobre un tema referencial.
 - Método deductivo, para analizar el contexto penal y constitucional aplicable al tema de estudio.
 - Método histórico, para analizar una institución poco conocida en la bibliografía especializada.
 - Método inferencial, para así relacionar el contexto penal con el ámbito constitucional.
 - Método de la ratio legis, para analizar las razones del legislador para emitir un silencio legislativo sobre un tema muy sensible.

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

a. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Etapas	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S
Búsqueda información												
Elaboración marco teórico												
Formulación del borrador del texto final												
Elaboración de los capítulos centrales de la tesis												
Validación de la hipótesis												
Presentación de la tesis												
Sustentación												

b. **PRESUPUESTO**

RUBRO	CANT.	DETALLE	TOTAL
Bienes y materiales			
Libros			500
Revistas			500
Servicios			
Impresiones			100
Empastados, anillados			
Uso internet			100
Gastos varios			100
Período de investigación			
Alimentación cuando se ha tenido que participar en eventos académicos			100
Movilidad en la búsqueda de material bibliográfico, participación en eventos para entrevistar a especialistas en derecho parlamentario.			100
Imprevistos			100
Total en soles			1600

c. FINANCIAMIENTO

Los gastos que demande la ejecución del presente trabajo de investigación serán cubiertos por recursos propios del investigador.

CONCLUSIONES

A la finalización del trabajo de investigación, señalamos las siguientes conclusiones, las cuales tienen el orden metodológico de detallar cada etapa de la Tesis:

1. En la actualidad, muchas “Altas Autoridades” que ejercen la jefatura o están desempeñando funciones en las Entidades de la Administración Pública que detalla el alcance de los artículos 99° y 100° de la Constitución se han visto involucrados en casos de corrupción, tanto en forma manifiesta como también en forma sospechosa, que ha provocado la ejecución de procesos de investigación, tanto en el propio Congreso de la República como en el ámbito jurisdiccional.

Esta penosa realidad es la que ha provocado la iniciativa en investigar la presente temática.

2. A efectos de delimitar nuestro “ámbito de investigación”, por cuestión metodológica, nos hemos limitado a todas las “Acusaciones Constitucionales” que implican un mayor nivel de referencia que la “infracción constitucional” y por ello sólo nos hemos limitado a casos de “Congresistas de la República” que han ejecutado delitos y por ellos han sido juzgados en el Poder Judicial y donde se registra una sentencia con calidad de cosa juzgada.

Esta situación permite generar la conclusión que la “inmunidad parlamentaria” ha sido lamentablemente mal entendida por los propios Congresistas de la República y se requiere una evaluación objetiva que permita evaluar dicho ámbito regulatorio para así o proceder a reformar su alcance en la Constitución o generar una reglamentación que se complemente con la determinación del “mandato imperativo”, conforme se ha propuesto en el presente trabajo de investigación: a través de un *procedimiento parlamentario específico*.

3. De la búsqueda bibliográfica, de las entrevistas a profesores y especialistas en derecho constitucional y derecho parlamentario, se desarrolló la formulación de la conclusión más importante: *no existe un procedimiento de acusación constitucional pre fijado o pre constituido a cada procedimiento ejecutado, porque los propios Congresistas de la República y la práctica parlamentaria no admiten la “regulación” de sus actos parlamentarios.*

La generación de un “procedimiento específico” que regule un *procedimiento parlamentario* usualmente se toma en contra a lo dispuesto por la Constitución Política que detalla que los congresistas están libres de “mandato imperativo” (artículo 93º) y si bien este concepto no resulta aplicado al contexto de la “normatividad reglamentaria” (Resolución Legislativa que se propone en la tesis) ello podría considerarse un límite funcional a sus actividades.

4. Los procedimientos de Acusación Constitucional, en base a los primeros elementos conclusivos, siempre se han sujeto a condiciones coyunturales y se perfilan al inicio de “cada legislatura”, con la instalación de la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, quien prepara un *reglamento* para ello.

Esta práctica parlamentaria, resulta ser muy especial, por cuanto se ha podido detectar que en determinadas situaciones no se ha procedido a redactar dicho reglamento, especialmente en años en los cuales no se han tratado “acusaciones constitucionales”.

5. La Acusación Constitucional tiene dos elementos de evaluación en base al “origen de la denuncia” y esta puede ser por “infracción constitucional”, que puede incluir la comisión de un delito o de una falta de carácter político-constitucional como por la “evaluación de la participación en un delito”.

Este elemento, por su “amplitud” contradice el *principio de legalidad* que motivó el origen de nuestra investigación.

6. De las referencias puntuales sobre “Acusaciones Constitucionales”, se han podido identificar tres situaciones específicas:
 - a) Acusaciones a congresistas de la República.
 - b) Ex Presidentes y Presidentes de la República.
 - c) Altas Autoridades. En este punto, corresponde detallar que tanto los “congresistas” como los “Presidentes de la República” son también “altas autoridades”, pero por razones de “identificación y metodología” se han diferenciado.
7. En la ejecución del trabajo de investigación se ha procurado analizar sólo casos que han provocado una “sentencia con calidad de cosa juzgada” luego de un procedimiento parlamentario donde se desarrolló la “Acusación Constitucional”.
8. El secretismo parlamentario es una constante en la práctica constitucional y política del país, que lamentablemente limita la crítica y observación democrática sobre el primer poder del Estado y motiva a que pocos autores se especialicen en la materia en evaluación.

RECOMENDACIONES

Se plantea que el *procedimiento parlamentario* para desarrollar una Acusación Constitucional, conforme los artículos 99 y 100 de la Constitución puedan tener el siguiente esquema.

PARTE I.

Etapas De la denuncia.

Donde se evalúa la “acusación” y el contenido de la “denuncia”.

PARTE II.

Del análisis de la denuncia.

Donde se evalúa el “trámite” a seguir, tomando en cuenta que la “denuncia puede ser por infracción a la constitución o por la ejecución de algún delito”.

PARTE III.

Análisis en Comisiones y derivado a Comisión Permanente.

Donde se evalúa el trámite a ser ejecutado en el “mismo Congreso de la República”, a través de sus órganos parlamentarios.

PARTE IV.

De las medidas punitivas del Congreso de la República.

Donde se desarrolla el *principio de legalidad*, sobre la base de la cual se ejecuta el poder punitivo del Congreso de la República, la cual está expuesta en:

- a) Llamada de atención.
- b) Suspensión en las funciones.

c) Inhabilitación.

En este ámbito se detalla que igualmente, las siguientes acciones son *niveles* de desarrollo del poder del Congreso de la República:

d) Destitución en el cargo.

e) Desafuero o retiro de la inmunidad parlamentaria.

Con este procedimiento detallado en la *ejecución de la tesis*, podemos plantear una solución al actual contexto de vacío normativo existente en la materia.

BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA EN LA INVESTIGACIÓN

- 1) Abad Yupanqui, Samuel (2013) El derecho al secreto de las comunicaciones. Alcances, límites y desarrollo jurisprudencial, En: *Pensamiento Constitucional*. Vol. 16, N° 16, 2012.
- 2) Alcántara Suarez, Manuel (2005) *Funciones, procedimientos y escenarios: un análisis del poder legislativo en América Latina*. Salamanca, Universidad de Salamanca.
- 3) Andujar, Jorge (1994) Francisco García Calderón y José de la Riva Agüero. En: Boletín IRA, N° 21, 1994.
- 4) Bermúdez Tapia, Manuel (2007) La responsabilidad parlamentaria y los procedimientos parlamentarios sancionatorios. P. 19, En: Revista Jurídica del Perú, N° 76, junio 2007.
- 5) Bustamante, Reynaldo (2003) El debido proceso en los procedimientos parlamentarios: a propósito de una jurisprudencia de la CIDH, En: *Proceso y Justicia*, N° 4, 2003.
- 6) Cairo Roldán, Omar (2014) El juicio político en la Constitución Peruana. En: *Pensamiento Constitucional*, Vol. 18, N° 18, 2013.
- 7) Canez Marticorena, Alfredo (2001) *Procedimientos parlamentarios de investigación y de acusación constitucional*. Lima, Alternativas.
- 8) Castillo Gálvez, Jorge (1991) La acusación constitucional contra Alan García. Lima, ILS.
- 9) CIDH (2018) *Resolución de la CIDH, de 8/02/2018, Medidas Provisionales respecto del Perú, Caso Durand y Ugarte vs. Perú*. Ubicado el 02/06/2018 Recuperado de: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/durand_se_02.pdf
- 10) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2001) *Acusación constitucional contra congresistas*. Ubicado el 20/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/sicr/RedacActas/Actas.nsf/actas/FAA1A12F941F11C705256D810053DB6E>.
- 11) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2012) *Pleno vota Acusación Constitucional contra Congresista Gustavo Espinoza*. Ubicado el 10/07/2018 de

- <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/04NoticiasArchivoHistorico/3e981f5f219ea2c40525767a00047c88/?OpenDocument>.
- 12) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2016) Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. Recuperado el 14/02/2016 de http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2012/sc_acusacionesConstitucionales/index.html
- 13) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Aprueban Acusación Constitucional contra Tula Benites*. Ubicado el 21/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/9388CD6A5C7125DB052573EC00678EFA/?OpenDocument>.
- 14) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Comisión Permanente aprobó acusar constitucionalmente a Alejandro Yovera*. Ubicado el 11/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/04NoticiasArchivoHistorico/5fb97ebb3771c1210525814c00731f01/?OpenDocument>.
- 15) CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2018) *Pleno aprobó Acusación Constitucional contra Elsa Canchaya*. Ubicado el 10/07/2018 de <http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/CNtitulares2/792BFF06106862F3052572F4000E79BC/?OpenDocument>
- 16) Congreso de los Diputados (1997) *El procedimiento legislativo*. Madrid, Congreso de los Diputados.
- 17) Delgado Guembes, César (2007) *Prerrogativas parlamentarias: aplicación y límites en un caso de antejuicio político*. Lima, Grijley.
- 18) Delgado Guembes, César (2009) *La naturaleza y los efectos del plazo en la acusación constitucional*. Lima, PUCP.
- 19) Delgado, Luis Humberto (1956) *Yo acuso 1956: ante el Congreso de la República*. Lima, Ariel.
- 20) DIARIO CORREO (2018) *Ex asesora de Moisés Mamani denuncia acoso del congresista*. Ubicado el 26/03/2018 de <https://diariocorreio.pe/politica/exasesora-moises-mamani-denuncia-acoso-congresista-despidio-estando-embarazada-810102/>.
- 21) Eguiguren, Francisco (2008) Antejuicio y juicio en el Perú, En: *Pensamiento Constitucional*, Año 13, N° 13, 2008

- 22) EL COMERCIO (2017) *Comisión de ética archivó ocho denuncias contra congresistas de Fuerza Popular*. Recuperado el 02/09/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/comision-etica-archivo-ocho-denuncias-congresistas-fuerza-popular-noticia-450169>.
- 23) EL COMERCIO (2017) *CIDH pide archivar acusación contra magistrados del TC*. Ubicado el 17/11/2017 Recuperado de: <https://elcomercio.pe/politica/corte-idh-pide-archivar-acusacion-magistrados-tc-noticia-496057>.
- 24) EL COMERCIO (2018) *¿Hasta donde es responsable el JNE en la elección de candidatos?* Ubicado el 25/04/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/responsable-jne-seleccion-candidatos-noticia-514732>.
- 25) EL COMERCIO (2018) *Oficializan sanciones contra Yesenia Ponce, Carlos Bruce y Maritza García*. Ubicado el 25/04/2018 de <https://elcomercio.pe/politica/oficializan-sanciones-yesenia-ponce-carlos-bruce-maritza-garcia-noticia-nndc-550468>.
- 26) Falconi Picardo, Marco (2015) *El proceso de acusación constitucional en el Perú*. Lima, Congreso de la República.
- 27) Fernández Segado, Francisco. Partidos políticos: representación parlamentaria e interdicción del mandato imperativo. En: *Pensamiento Constitucional*. Año 2, Nº 2, 1995.
- 28) García Belaúnde, Domingo (2005) *¿Antejuicio, acusación constitucional, juicio político?* En: VIII Congreso de derecho constitucional. Lima, APDC.
- 29) García Chávarri. Abraham (2008) *Acusación constitucional y debido proceso*. Lima, Jurista.
- 30) GESTIÓN (2018) *El caso del magistrado del TC que mintió sobre ser "Doctor en Derecho"*. Recuperado el 18/07/2018, ubicado en: <https://gestion.pe/blog/menulegal/2018/04/el-caso-del-magistrado-del-tc-que-mintio-sobre-ser-doctor-en-derecho-eloy-espinosa-saldana-detalle-por-detalle.html>.
- 31) Giles Ferrer, Arturo (1986) *La acusación constitucional*. Tesis para optar el grado de Bachiller por la PUCP.

- 32) Gómez Sarmiento, José (1985) *La inmunidad parlamentaria en Colombia*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- 33) Gorriti, Gustavo (2009) *Petroaudios, políticos, espías y periodistas*. Lima, Planeta.
- 34) Gutiérrez Ticse, Gustavo (2016) *La inmunidad parlamentaria en el Estado democrático constitucional: un estudio a partir del caso peruano*. Tesis para optar el grado de Magister en Derecho Constitucional en la PUCP.
- 35) IDEHPUCP (2013) *Sentencia del TC en caso Elsa Canchaya*. Ubicado el 20/07/2018 de <http://idehpucp.edu.pe/wp.content/uploads/2012/07/boletin-31-comentario-canchaya.pdf>.
- 36) Instituto de Estudios Peruanos (2017) *El Perú en teoría*. Lima, IEP.
- 37) LA REPÚBLICA (2013) *Miguel Chehade es condenado a tres años de prisión por caso Andahuasi*. Ubicado el 27/08/2013 de <https://larepublica.pe/politica/734421-miguel-chehade-es-condenado-a-tres-anos-de-prision-por-caso-andahuasi>.
- 38) LA REPÚBLICA (2013) *Tribunal Constitucional anuló condena a Elsa Canchaya*. Ubicado el 01/10/2013 de <https://larepublica.pe/politica/742234-por-prescripcion-tribunal-constitucional-anulo-la-condena-a-elsa-canchaya>.
- 39) LA REPÚBLICA (2014) *Caso Lava Pies. Sentencia a dos años a ex trabajadora*. Ubicado el 09/01/2014 de <https://larepublica.pe/politica/764045-caso-lava-pies-sentencian-a-dos-anos-de-prision-suspendida-a-mujer-que-difamo-a-rosario-sasieta>.
- 40) LA REPÚBLICA (2017) *Maritza García: Anulan título y grados a fujimorista por certificado falso*. Recuperado el 20/12/2017 de <https://larepublica.pe/politica/1160246-maritza-garcia-anulan-titulo-y-grados-a-fujimorista-por-certificados-falsos>.
- 41) LA REPÚBLICA (2017) *TC informe plantea destituir a un magistrado y suspender a dos*. Recuperado el 20/12/2017, ubicado en: <https://larepublica.pe/politica/1157247-tc-informe-plantea-destituir-a-un-magistrado-y-suspender-a-dos>.

- 42) LA REPÚBLICA (2018) *Sólo el 12% aprueba al Congreso*. Recuperado el 10/08/2018 de <https://larepublica.pe/politica/999597-el-64-de-los-peruanos-desaprueba-desempeno-del-congreso>.
- 43) Landa Arroyo, César (2005) Antejudio Político. En: *Elecciones*, Año 4, N° 5, octubre 2005.
- 44) Landa Arroyo, César (2005) Antejudio Político. En: *Elecciones*, Año 4, N° 5, octubre 2005.
- 45) Latorre Boza, Derick (2008) Inmunidad parlamentaria. En: *Derecho y Sociedad*, Año 19, N° 31, diciembre 2008.
- 46) LUCIDEZ (2017) *Cinco congresistas con denuncias realmente graves*. Recuperado el 11/11/2017 de <http://lucidez.pe/politica/5-congresistas-con-denuncias-realmente-graves-que-fueron-archivadas/>.
- 47) Mauceri, Philip (1989) *Militares: insurgencia y democratización en el Perú*. Lima, IEP.
- 48) Mora Donato, Cecilia (2008) *El procedimiento legislativo en México*. México, UNAM, p. 43.
- 49) Mora Donato, Cecilia (2008) El procedimiento legislativo y el trabajo de las comisiones parlamentarias en el Congreso Mexicano, En: *Derecho y Sociedad*, Año 19, N° 31, diciembre 2008.
- 50) Morales Saravia, Francisco (1997) Forma jurídica del Estado en el constitucionalismo peruano del siglo XIX, p. 329 en: *Pensamiento Constitucional*. Vol. 4, N° 4, 1997.
- 51) Olivera Diaz, Guillermo (1989) *El caso Perciles: antejudio contra 4 vocales supremos*. Lima, Editorial San Marcos.
- 52) PERÚ 21 (2013) *Michael Urtecho recibiría condena de 15 años*. Ubicado el 09/10/2013 de <https://peru21.pe/politica/michael-urtecho-recibiria-condena-15-anos-127804>.
- 53) PODER JUDICIAL (2005) *Levantamiento de inmunidad parlamentaria*. Ubicado el 20/07/2018 de: http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/spe/noticia_imprimir.asp?codigo=1685.

- 54)RAE JURISPRUDENCIA (2012) Inmunidad parlamentaria, En: *RAE Jurisprudencia*. Año 4º, Tomo 45, marzo 2012.
- 55) Ramos Núñez, Carlos (2009) Historia de la Corte Suprema de Justicia. Lima, Poder Judicial.
- 56)Revista Parlamentaria (2012) ¿Crisis legislativa? Negociación, procedimiento e inmunidad. En: *Revista Parlamentaria*. Vol. 19, N° 1, junio 2012.
- 57)Riascos Bernal, Luis (1976) *De la inmunidad parlamentaria*. Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- 58)RPP (2012) Omar Chehade renuncia a la segunda vicepresidencia de la República. Recuperado el 16/01/2012 de <https://rpp.pe/politica/actualidad/omar-chehade-renuncia-a-segunda-vicepresidencia-de-la-republica-noticia-441492>.
- 59)RPP (2019) *Congresista Mayorga obligó a asistente a planchar su ropa*. Ubicado el 27/09/2009 de <https://rpp.pe/politica/actualidad/congresista-mayorga-obligo-a-asistente-a-planchar-su-ropa-denuncian-noticia-211781>.
- 60)Sánchez Marín, José (1990) *La inmunidad parlamentaria en el Perú*. Tesis para optar el grado de Bachiller, Facultad de Derecho, PUCP.
- 61)Sar Suarez, Omar (2005) El antejuicio, el juicio político y la vacancia presidencial analizados a partir de la sentencia de inconstitucionalidad del inciso j del artículo 89del Reglamento del Congreso, en: *Ius Et Veritas*, Año 15, N° 31, 2005.
- 62)Solís López, Augusto (2017) *Odebrecht y la IIRSA norte y sur*. Tesis para optar el grado de maestría en Derecho Penal en la PUCP.
- 63)Torres Márquez, Juan Carlos. El Derecho de insurgencia, un arma de índole constitucional. En: *Ius Et Veritas*, N° 20, p. 465.
- 64)UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTTOYA (2010) *Estudios sobre el Congreso Peruano: grupos parlamentarios, disciplina partidaria y desempeño profesional*. Lima, Universidad Antonio Ruiz de Montoya.
- 65)Wieland Conroy, Hubert (2011) Representación, mandato imperativo e inmunidad parlamentaria, En: *Gaceta Constitucional*. Tomo N° 40, abril 2011.

- 66) Yshi Meza, Luis (1991) La pena de inhabilitación en los delitos contra la administración pública. En: Libro Homenaje al profesor Hurtado Pozo. Lima, IDEMSA.